

# DIÁLOGO GLOBAL

5.1

4 ediciones al año en 15 idiomas

Charlie Hebdo

Boaventura de Sousa Santos

Dos caminos a la sociología pública

Nira Yuval-Davis

Una vida de compromiso crítico

Issa Shivji

Capitalismo vs justicia climática

Herbert Docena

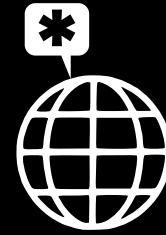
Practicando sociología pública

Ariane Hanemaayer y Christopher Schneider

Simposios globales:

- > Protestas en asentamientos informales
- > Los patrones cambiantes del trabajo en Francia
- > Sociología indonesia

MAGAZINE



Asociación  
Internacional  
de Sociología



VOLUMEN 5 / NÚMERO 1 / MARZO 2015  
<http://isa-global-dialogue.net>

DG



# > Editorial

## Del ser en la sociología pública

**E**sta edición de *Diálogo Global* inicia con las reflexiones de Boaventura de Sousa Santos sobre la horrible masacre de los caricaturistas de *Charlie Hebdo*. Si alguna vez ha habido una serie de eventos que pidan a gritos análisis sociológicos, es ahora: considerar la razón de la masacre, la naturaleza de los asesinatos, el impacto de las caricaturas, la respuesta del estado y el apoyo que tuvo. Lo que aprendimos fue que la “libertad de expresión” es menos un supuesto y más un terreno de disputas, así como los significados de “musulmán” y “terrorista” (alguien puede ser terrorista para algunos y defensor de libertad para otros). Y sobre todo, como Santos lo logra con destreza, debemos tomar una perspectiva global. Tenemos que ver los eventos en el contexto de regímenes de violencia y extremismo que están barriendo el mundo, muchos de ellos perpetrados por estados-nación y que reciben muy poca atención.

La matanza pide a gritos análisis sociológicos, pero los sociólogos están callados, y temen entrar en este terreno peligroso, temen volverse sociólogos públicos. En efecto, puede ser una actividad peligrosa. Lidiando con estos temas, Nira Yuval-Davis señala dos caminos a la sociología pública: uno de la socióloga en exilio que toma posiciones desde los márgenes y la otra del sociólogo que, como el famoso académico israelí Baruch Kimmerling, mira los problemas desde dentro del centro israelí pero desde una perspectiva crítica. Al enfrentar un conjunto muy distinto de desafíos en África, el retrato de Issa Shivji revela a un activista-académico, que no compromete su crítica hacia el estado tanzano y su defensa pública de la autonomía universitaria.

La sociología pública no es peligrosa necesariamente, sino simplemente compleja y urgente. Herbert Docena ha estado siguiendo de cerca las conferencias de la ONU sobre cambio climático. Al observar las funestas negociaciones que no llegan a nada, se enfoca en los crecientes movimientos anti-capitalistas que hacen un llamado por intervenciones más drásticas. Finalmente, la sociología pública importante se puede hacer localmente, como Ariane Hanemaayer y Christopher Schneider demuestran con sus reuniones de cafeterías, que llevan las universidades a los públicos, y sus clases abiertas, que llevan los públicos a la universidad.

Esta edición de *Diálogo Global* también contiene tres simposios. Tenemos una colección de ensayos sobre asentamientos urbanos informales y desalojos en Chile, Uruguay, Colombia, Sudáfrica y Zambia. A pesar de la violencia pomposa ejercida sobre algunos de sus habitantes, la protesta continúa, no como estallidos espontáneos sino como acciones políticamente organizadas, a veces exitosas pero a menudo fallidas. También mostramos sociología de Indonesia, con cinco ensayos sobre la nueva democracia que está moldeando los legados de la religión, la educación, el trabajo y la movilidad social. Finalmente, tenemos tres ensayos de Francia, enfocados en nuevos patrones de trabajo: laboratorios de invenciones de moda, la adecuación de los lugares de trabajo a las enfermedades crónicas, y un presagio de la “sociedad multiactiva” que disuelve la distinción entre trabajo asalariado, trabajo de cuidado no remunerado y actividades cívicas.

> ***Diálogo Global* puede encontrarse en 15 idiomas en la [página web de la AIS](#)**

> **Las propuestas deben ser enviadas a [burawoy@berkeley.edu](mailto:burawoy@berkeley.edu)**



El sociólogo y académico jurídico mundialmente famoso, **Boaventura de Sousa Santos**, toma una perspectiva global sobre el asesinato de los caricaturistas de *Charlie Hebdo*.



**Nira Yuval-Davis**, distinguida socióloga de género y derechos humanos, tiene una conversación interna con el famoso sociólogo israelí Baruch Kimmerling sobre los distintos caminos de la sociología pública.



**Issa Shivji**, reconocido crítico de izquierda de Tanzania, fue entrevistado por uno de sus estudiantes sobre el papel de las universidades en África.



**Diálogo Global** se hace posible gracias a una generosa donación de **SAGE Publications**.

# > Comité editorial

**Editor:** Michael Burawoy.

**Editora asociada:** Gay Seidman.

**Editores jefe:** Lola Busuttil, August Bagà.

**Editores consultores:**

Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamin Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalón, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

**Equipos regionales**

**Mundo árabe:**

Sari Hanafi, Mounir Saidani.

**Brasil:**

Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Renata Barreto Preturlan, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Rafael de Souza, Benno Alves.

**Colombia:**

María José Álvarez Rivadulla, Sebastián Villamizar Santamaría, Andrés Castro Araújo, Katherine Gaitán Santamaría.

**India:**

Ishwar Modi, Rashmi Jain, Pragya Sharma, Jyoti Sidana, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

**Irán:**

Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Mitra Daneshvar, Faezeh Khajehzadeh.

**Japón:**

Satomi Yamamoto, Hikari Kubota, Takazumi Okada, Fuma Sekiguchi, Kazuki Uyeyama.

**Kazajistán:**

Aigul Zabirowa, Bayan Smagambet, Gulim Dossanova, Julduz Battalova, Almagul Nurusheva, Daurenbek Kuleimenov, Elmira Otar.

**Polonia:**

Jakub Barszczewski, Martyna Dolores, Mariusz Finkielstein, Weronika Gawarska, Krzysztof Gubański, Kinga Jakiela, Justyna Kościńska, Przemysław Marcowski, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska, Adam Müller, Zofia Penza, Anna Wandzel, Justyna Zielińska.

**Rumania:**

Cosima Rughiniş, Ileana-Cinziana Surdu, Corina Brăgaru, Telegdy Balazs, Adriana Bondor, Ramona Cantaragiu, Ruxandra Iordache, Mihai Bogdan Marian, Angelica Marinescu, Monica Nădrag, Mădălin-Bogdan Rapan, Alina Stan, Elisabeta Toma, Elena Tudor, Cristian Constantin Veres.

**Rusia:**

Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova.

**Taiwán:**

Jing-Mao Ho.

**Turquía:**

Gül Corbacioglu, Irmak Evren.

**Consultores de medios:**

Gustavo Taniguti, José Reguera.

**Consultora editorial:** Ana Villarreal.

# > En esta edición

Editorial: Del ser en la sociología pública	2
<i>Charlie Hebdo</i> – Algunos dilemas difíciles <b>por Boaventura de Sousa Santos, Portugal</b>	4
Dos caminos hacia la sociología pública <b>por Nira Yuval-Davis, Inglaterra</b>	7
Una vida de compromiso crítico: entrevista con Issa Shivi <b>por Sabatho Nyamsenda, Tanzania</b>	10
Capitalismo vs justicia climática <b>por Herbert Docena, Filipinas y EEUU</b>	13
Practicando sociología pública <b>por Ariane Hanemaayer y Christopher J. Schneider, Canadá</b>	17

## > PROTESTAS EN ASENTAMIENTOS INFORMALES

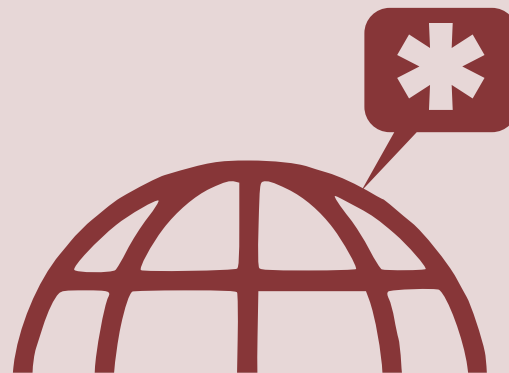
Reclamando el derecho a la ciudad: La movilización popular en Chile <b>por Simón Escoffier, Inglaterra</b>	19
Asentamientos informales y política en Uruguay <b>por María José Álvarez Rivadulla, Colombia</b>	21
El crecimiento del Movimiento de Trabajadores Sin Techo <b>por Cibele Rizek y André Dal'Bó, Brasil</b>	24
Protestas de los pobres en Sudáfrica <b>por Prishani Naidoo, Sudáfrica</b>	26
Zambia: Desalojos sin movimientos sociales <b>por Singumbe Mueyeba, Sudáfrica</b>	29

## > LOS PATRONES CAMBIANTES DEL TRABAJO EN FRANCIA

Fablabs y Hackerspacios: La creación de una nueva cultura <b>por Isabelle Berrebi-Hoffmann, Marie-Christine Bureau, y Michel Lallement, Francia</b>	31
La búsqueda de la igualdad de género en una "sociedad multi-activa" <b>por Bernard Fusulier, Bélgica, y Chantal Nicole-Drancourt, Francia</b>	33
Negociando enfermedades crónicas en el trabajo <b>por Anne-Marie Waser, Dominique Lhuillier, Frédéric Brugeilles, Pierre Lénel, Guillaume Huez, Joëlle Mezza y Cathy Hermand, Francia</b>	35

## > SOCIOLOGÍA EN INDONESIA

Festejando la democracia en Indonesia <b>por Lucia Ratih Kusumadewi, Indonesia</b>	37
Corporativizando la educación superior indonesia <b>por Kamanto Sunarto, Indonesia</b>	39
Movimientos laborales y políticas de la clase trabajadora en Indonesia <b>por Hari Nugroho, Indonesia</b>	41
Cuando la religión se convierte en identidad legal <b>por Antonius Cahyadi, Indonesia</b>	43
Estimulando la movilidad ascendente en Indonesia <b>por Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Indonesia</b>	45



# > Charlie Hebdo

## Algunos dilemas difíciles

por **Boaventura de Sousa Santos**, Universidad de Coímbra, Portugal y miembro del Comité Programático del Congreso Mundial de la AIS de 2014



Líderes mundiales marchando juntos en París en honor a las víctimas de los asesinatos de Charlie Hebdo.

**L**a atrocidad del crimen contra los periodistas y caricaturistas de *Charlie Hebdo* hace que sea difícil ofrecer un análisis desapasionado de las implicaciones de este acto bárbaro, su contexto y precedentes, así como su impacto y futuras repercusiones. Aún así se necesita urgentemente un análisis de ese tipo, no sea que avivemos las llamas de un fuego que uno de estos días podría llegar a las escuelas de nuestros niños, nuestros hogares, nuestras instituciones y nuestras conciencias. Estas son algunas ideas hacia ese análisis.

### > **Violencia y Democracia**

Uno no puede establecer una conexión directa entre la tragedia de *Charlie Hebdo* y la lucha contra el terrorismo emprendida por EE.UU. y sus aliados desde septiembre de 2001. Sin embargo, como lo demuestra el reciente informe al Congreso de Estados Unidos, es un hecho conocido que la agresividad extrema de Occidente ha provocado la muerte de muchos miles de civiles inocentes (la mayoría musulmanes) y ha infligido sorprendentes niveles de violencia y >>

tortura en jóvenes musulmanes cuya mala conducta, en el mejor de los casos, era presumida de manera especulativa. También es bien sabido que la mayoría de radicales islámicos afirma que su radicalización viene de su enojo ante toda esa violencia sin reparos. En vista de esto, debemos detenernos y considerar si la mejor vía de poner fin a este espiral de violencia es continuar con las mismas políticas que la han llevado hasta donde está actualmente, como ha quedado claro hasta ahora. La respuesta francesa al ataque fue suspender la normalidad democrática y constitucional con un estado de sitio no declarado. Se asume que a este tipo de criminal se le debe matar a tiros en vez de encarcelarlo y llevarlo a la justicia, y que ese comportamiento no contradice de ninguna forma los valores occidentales. Hemos entrado a una fase de guerra civil de baja intensidad. ¿Quién en Europa podría beneficiarse de ella? Ciertamente no serán el partido Podemos en España, o Syriza en Grecia.

### > Libertad de expresión

La libertad de poder expresarse es un bien precioso, pero este también tiene sus límites, y la verdad es que la inmensa mayoría de esos límites son impuestos por aquellos que defienden la libertad ilimitada cuando su propia libertad se ve reducida. Los ejemplos de límites así son innumerables: en Inglaterra una persona puede ser arrestada por decir que David Cameron tiene las manos untadas de sangre; en Francia a las mujeres islámicas no se les permite usar un hiyab; en 2008, el caricaturista Siné (Maurice Sinet) fue despedido de *Charlie Hebdo* por escribir un artículo supuestamente antisemita. Todo esto quiere decir que los límites sí existen, es sólo que varían para distintos grupos de interés. Tomemos a América Latina, por ejemplo, donde los principales medios de comunicación (que son controlados por familias oligárquicas y el gran capital) son los primeros en clamar por una libertad de ex-

presión ilimitada, para que después puedan abusar de los gobiernos progresistas y silenciar todo los esfuerzos que han hecho esos gobiernos para promover el bienestar de los pobres. Parece que *Charlie Hebdo* no conocía límites cuando se trataba de caricaturizar a los musulmanes, aunque muchos de sus caricaturas pueden ser leídas como propaganda racista que alimentó la ola islamofóbica y anti inmigrante que recorre a Francia y a Europa en general. Además de muchas caricaturas en donde el Profeta es mostrado haciendo poses indecentes, hay una en particular que fue explorada por la extrema derecha. Mostraba a un grupo de mujeres musulmanas embarazadas presentadas como esclavas sexuales de Bokoo Haram, sus manos descansando sobre sus estómagos hinchados y gritando "No toquen nuestras prestaciones sociales". La caricatura logró estigmatizar al Islam, las mujeres y al Estado de Bienestar de un solo golpe. Como era de esperarse, con el paso de los años la comunidad musulmana más grande de Europa vio este editorial como algo ofensivo. Por otro lado, sin embargo, su condena al crimen bárbarico en París fue inmediata. Así que debemos reflexionar sobre las contradicciones y asimetrías de los valores vividos que algunos de nosotros creemos que son universales.

### > La tolerancia y los "valores occidentales"

El contexto del crimen está dominado por dos corrientes de opinión, ninguna de las cuales es conducente a la construcción de una Europa inclusiva e intercultural. La más radical de las dos es abiertamente islamofóbica y anti inmigrante. Ellos son los más intransigentes de la extrema derecha a lo largo de Europa y de la derecha cuando se siente amenazada en una elección (como fue el caso del griego Antonis Samaras). Para esta corriente de pensamiento, los enemigos de la civilización europea están entre "nosotros", nos odian, llevan nuestros pasaportes, y

la situación no puede ser resuelta a menos de que sean eliminados. Las alusiones anti inmigrantes son infundibles. La otra corriente es la de la tolerancia. Estas personas son muy distintas a nosotros, son una carga, pero tenemos que "aguantarlos" ya que, cuando menos, son útiles; sin embargo, debemos hacerlo sólo si ellos se comportan moderadamente y asimilan nuestros valores.

Pero, ¿qué son los "valores occidentales"? Después de muchos siglos de atrocidades que han sido cometidas dentro y fuera de Europa en nombre de esos valores (de la violencia colonial a dos guerras mundiales) es necesario un grado de cautela y mucha reflexión acerca de qué son esos valores, y también sobre por qué, dependiendo del contexto, algunos valores prevalecen sobre otros. Por ejemplo, nadie cuestiona el valor de la libertad, pero lo mismo no puede ser dicho sobre la igualdad y la fraternidad que son los dos valores detrás del Estado de Bienestar que prevaleció en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. En años recientes, sin embargo, la protección social (que solía asegurar niveles altos de integración social) empezó a ser cuestionada por políticos conservadores y ahora es vista como un lujo inasequible por los partidos gobernantes, ya sean de centro-izquierda o centro-derecha. ¿Acaso no es cierto que la crisis social producida por el desmantelamiento de la protección social y por el creciente desempleo (especialmente entre los jóvenes) es como un combustible a las llamas del radicalismo que encontramos en las generaciones más jóvenes (especialmente aquellos que, además del desempleo, son víctimas de una discriminación étnica y religiosa)?

### > Un choque de fanatismo, no de civilizaciones

Lo que ahora enfrentamos no es un choque de civilizaciones, porque las civilizaciones cristianas e islámicas comparten las mismas raíces. Lo que tenemos ante nosotros es un choque

&gt;&gt;

de fanatismos, incluso si algunos de ellos están demasiado cerca de nosotros para ser reconocidos como tales. La historia muestra que los fanatismos y la forma en que chocan han estado relacionados siempre con los intereses económicos y políticos de las élites. Nunca han sido favorables para las clases populares que, siendo soldados, siempre llevan la peor parte de estos enfrentamientos. En Europa y sus áreas de influencia, este es el caso de las Cruzadas y la Inquisición, la evangelización de poblaciones coloniales, las guerras religiosas y el conflicto en Irlanda del Norte. Por fuera de Europa, una religión tan pacífica como el budismo ha legitimado la masacre de muchos miles de miembros de la minoría Tamil en Sri Lanka; en 2003, los fundamentalistas hindúes también masacraron a las poblaciones musulmanas en Gujarat, y la probabilidad de que también suban al poder como resultado de la reciente victoria del presidente Modi hace que uno tema lo peor; también es en nombre de la religión que Israel está llevando a cabo con impunidad la limpieza étnica de Palestina y que el llamado "Estado Islámico" está masacrando poblaciones musulmanas en Siria e Irak. ¿Es posible que la defensa de un secularismo sin restric-

ciones en una Europa intercultural, donde muchos no se identifican con este valor particular, sea en sí misma una forma de extremismo? ¿Los extremismos se oponen unos a otros? ¿Están interconectados? ¿Qué relaciones hay entre los yihadistas y las agencias de inteligencia occidentales? ¿Cómo es que los yihadistas del Estado Islámico, que ahora son vistos como terroristas, solían ser luchadores por la libertad cuando combatían contra Gaddafi y Assad? ¿Cómo es que el Estado Islámico esté siendo financiado por Arabia Saudita, Katar, Kuwait y Turquía, todos ellos aliados de Occidente? Dicho esto, el hecho sigue siendo que al menos durante la última década la inmensa mayoría de las víctimas de todo fanatismo (incluyendo al fanatismo islámico) pertenecían a poblaciones musulmanas que no eran fanáticas.

### > El valor de la vida humana

El repudio absoluto e incondicional que experimentaron los europeos frente a estas muertes debe hacer que nos preguntemos por qué no sienten el mismo tipo de repudio frente a un número similar (cuando no mucho mayor) de muertes inocentes causadas por conflictos que en el

fondo puede que hayan tenido algo que ver con la tragedia de *Charlie Hebdo*. Ese mismo día murieron 37 jóvenes por un ataque de bomba en Yemen. A mitad del año pasado, la invasión israelita causó la muerte de 2000 palestinos, entre ellos 1500 civiles y 500 niños. En México han muerto 102 periodistas desde el año 2000 por hablar sobre la libertad de prensa, y en noviembre de 2014 fueron asesinados 43 jóvenes manifestantes en Ayotzinapa, también en México. Sin duda la diferencia en esas reacciones no puede basarse en la noción de que la vida de los europeos blancos, viniendo de una cultura cristiana, vale más que la vida de no europeos o de europeos de otro color cuya cultura se origina en religiones o regiones diferentes. ¿Acaso es porque estos últimos viven apartados de los europeos y les son menos familiares? Por otro lado, ¿acaso el mandato cristiano de amar al prójimo permite esas distinciones? ¿Acaso es porque los grandes medios y líderes políticos de Occidente tienden a trivializar el sufrimiento infligido a esos otros, o incluso los demonizan hasta el punto de hacernos pensar que ellos se lo han buscado? ■

Dirigir toda la correspondencia a Boaventura de Sousa Santos <[bsantos@ces.uc.pt](mailto:bsantos@ces.uc.pt)>

# > Dos caminos hacia la sociología pública

por **Nira Yuval-Davis**, Universidad de Londres del Este, Inglaterra, presidenta del Comité de Investigación de la AIS sobre Racismo, Nacionalismo y Relaciones Étnicas (RC05) 2002-6 y miembro del Comité Programático del Congreso Mundial de la AIS en Durban, 2006



**Nira Yuval-Davis** es una disidente israelí que ha sido defensora de los derechos humanos por muchos años: miembro fundadora de Mujeres Contra el Fundamentalismo y la red internacional de investigación Mujeres en Zonas de Conflicto Militarizadas; también ha sido consultora de varias ramas de las Naciones Unidas y de varias ONG, incluyendo Amnistía Internacional. Es conocida internacionalmente por sus investigaciones sobre género, racismo y fundamentalismo religioso, sus libros incluyen *Racialized Boundaries* [Fronteras racializadas], *Gender and Nation* [Género y nación], *The Politics of Belonging* [Las políticas de la pertenencia], *Women against Fundamentalism* [Mujeres contra el fundamentalismo]. Es directora del Centro de Investigaciones sobre Migración, Refugiados y Pertenencia en la Universidad de Londres del Este. Este ensayo es una conversación interna con el renombrado sociólogo israelí (ahora fallecido) Baruch Kimmerling sobre los diferentes caminos que llevan a la sociología pública.

**B**aruch Kimmerling, quien llegó a Israel en calidad de refugiado de Rumania luego de 1948 y que sufrió de parálisis cerebral toda su vida, fue uno de los sociólogos más importantes y mejor conocidos de Israel, sobretodo debido a sus contribuciones frecuentes a la prensa israelí.

Baruch y yo fuimos amigos desde nuestros primeros años juntos como estudiantes universitarios en la Universidad Hebrea, donde Baruch permaneció durante toda su vida; yo me fui luego de terminar mi maestría en 1969, primero a EE.UU. y luego a Inglaterra. Como estudiantes e investigadores, ambos nos rebelamos contra Shmuel Eisenstadt (quien dominó la sociología israelí por casi 40 años), pero nuestros enfoques sociológicos y nuestras posturas políticas fueron muy diferentes. Yo me radicalicé hacia un tipo de análisis no-sionista (y luego anti sionista) del estado y la sociedad israelí; Baruch llegó a conclusiones similares luego de muchos años más y de un estudio sistemático del conflicto y las sociedades israelí y palestinas (aunque continuó etiquetándose a sí mismo como sionista). Él desarrolló importantes aspectos de este campo de la sociología, mientras que yo me fui por el lado de lo que podría resumirse como las políticas interseccionales de la pertenencia.

Cuando Baruch murió en 2007, yo fui una de las científicas sociales israelíes, palestinas e internacionales invitada a presentar ponencias en una conferencia conmemorativa, hablé de la ansiedad existencial de los israelitas; especialmente de aquellos a quien Baruch llamaba “los akhushalim”, los asquenazí sionistas de izquierda y seculares que fueron hegemónicos durante el movimiento sionista por la mayor parte del siglo XX. Relacioné esta ansiedad existencial a varios factores endémicos, algunos que son comunes a toda minoría hegemónica involucrada en proyectos coloniales; otros que son comunes a las “sociedades neoliberales del riesgo”; algunos más específicos a Israel, que tienen que ver con su carácter como una sociedad en guerra permanente así como el creciente judaísmo mesiánico fundamentalista que amenaza con socavar el régimen cuasi secular de Israel.

Para mi sorpresa, lo que dije fue recibido positivamente en general, muy distinto a la forma en que mis análisis

>>

habían sido recibidos en el pasado. (Sin embargo, aunque los mensajes radicales presentados por los ponentes no generaron resistencia durante la conferencia, cinco años más tarde el volumen de ponencias aún no ha sido publicado, aparentemente debido a la resistencia del Instituto Van Leer que fue sede de la conferencia.)

Quisiera recomendar especialmente la autobiografía de Baruch<sup>1</sup>, que está escrita con su usual ingenio y honestidad intelectual, y que también aportará a la comprensión del lector sobre el conflicto israelí/palestino. No obstante, este texto suscita importantes preguntas en relación a la sociología pública. Aquí me limito a dos preguntas centrales.

### > Sociología pública y profesional

Baruch argumenta que separó completamente su trabajo público periodístico de su trabajo profesional académico, una diferenciación que sigue de su creencia weberiana en lo que Donna Haraway ha llamado “el truco de dios: poder verlo todo desde ningún sitio en particular”. En contraste, yo he argumentado por un conocimiento y una imaginación situada, siguiendo a la teoría feminista y otras tradiciones radicales (marxistas y anti racistas) dentro de la sociología del conocimiento. En lugar de una posición relativista (que insiste en muchas verdades que deben ser juzgadas por sus propios méritos y por lo tanto son incomparables), sostengo que el punto de vista propio (que incluye posiciones sociales, identificaciones y valores normativos irreducibles uno al otro, pero mediados por las experiencias y prácticas vitales de uno; que son fluidos y disputados pero también condicionados por restricciones estructurales y procesuales particulares) afectan la manera en la que uno ve el mundo. El conocimiento de lo “verdadero” sólo puede ser aproximado por un proceso dialógico y constructivo en el cual muchas miradas situadas participan dentro de contextos espaciales y temporales particulares.

Mi problema con la dicotomía de Baruch entre lo político y lo profesional no es sólo de carácter epistemológico. A lo largo de mis años como socióloga y activista política he descubierto que estos dos modos de acción se alimentan y se dan un soporte crucial; por un lado, el activismo político de base ayuda a adquirir una comprensión empática sobre otras miradas situadas y, por otro lado, la investigación teórica y empírica ayuda a refinar y cuestionar algunas de las dicotomías burdas de las políticas de la identidad. Por otra parte, la línea que separa a ambas parece artificial cuando consideramos por qué algunos investigadores particulares abordan proyectos de investigación particulares y la manera en como diseminan los resultados de su investigación.

Las intervenciones públicas de Baruch demuestran el mismo patrón de preocupaciones superpuestas y aportes



**Baruch Kimmerling** nació en 1939 de madre húngara y padre rumano. Después de escapar del Holocausto, la familia de Baruch inmigró a Israel donde él creció. Estudió sociología en la Universidad Hebrea

en Jerusalén, donde investigó y enseñó durante la mayor parte de su vida adulta. Tras el bombardeo en la cafetería de la universidad en 1969, empezó a estudiar las raíces, la historia y la actualidad del conflicto palestino-israelí, desarrollando un enfoque que contradecía la narrativa israelita oficial. Siendo un crítico abierto de las políticas israelitas, fue objeto de una dura recriminación. A lo largo de sus escritos y enseñanzas trató de influenciar la opinión pública de Israel hacia un estado genuinamente democrático que aceptara todos sus ciudadanos sin discriminación, renunciara a la agresividad militar y se esforzara por alcanzar la paz a través del compromiso y los enfoques humanitarios. Baruch murió en 2007, fiel a sus valores e ideas y muy preocupado por el futuro de Israel. Entre sus libros se encuentran *Zionism and Territory: The Socioterritorial Dimensions of Zionist Politics* (1983), *The Invention and Decline of Israeliness: State, Culture and Military in Israel* (2001); *Politicide: La guerra de Ariel Sharon contra los palestinos* (2004).

mutuos, empezando por el momento en que decidió estudiar el conflicto israelí-palestino luego del atentado de 1969 en la cafetería de su campus universitario. Dudo mucho de la afirmación de Baruch cuando dijo que se apoyaba menos en la intuición en su trabajo “científico” que en su trabajo político. Baruch mismo señala, en relación a la teoría del cambio paradigmático de Kuhn, que toda recolección de datos involucra elementos de selectividad. Aún así, comparto su frustración con el hecho de que las personas juzgaban su trabajo sociológico sólo después de haber leído sus pequeños artículos públicos.

Sin embargo, los cambiantes paradigmas de conocimiento de Baruch y su comprensión de las sociedades israelitas y palestinas suscitan una segunda cuestión que se relacionan con la afirmación de que su posición como “marginado en el centro” fue una precondition y la forma de su sociología pública.



## > El papel de la posición social en la sociología pública

De manera minuciosa, reflexiva y honesta, Baruch describe su primer artículo en el periódico más antiguo de Israel, *Ha'aretz*, como un ataque profundo y extremo al libro de Sabri Jiryis, *Los árabes en Israel*. Mucho después Baruch no sólo se dio cuenta que Sabri estaba en lo cierto sino que, al no tener acceso a materiales de archivo, Sabri había subestimado la magnitud y la crueldad de los medios por los cuales los palestinos israelitas habían sido controlados y sus tierras confiscadas. Baruch tuvo un cambio de parecer similar con respecto al libro de Ian Lustick, *Los árabes en el Estado de Israel*, el cual iría a elogiar posteriormente. (Aunque no lo menciona en su autobiografía, me escribió como un amigo preocupado tras la publicación en 1975 de un libro co-editado por mí, *Israel y los palestinos*, y me recomendó no incluirlo en mi hoja de vida. Muchos de esos artículos, incluyendo los míos, se corresponden muy de cerca de los últimos artículos escritos por Baruch.)

Con los años, Baruch fue capaz de reevaluar su comprensión acerca de las sociedades israelitas y palestinas, y sus conflictos; se convirtió en un sociólogo público maravilloso, cuyos escritos sirvieron para influenciar ampliamente la opinión israelí en maneras importantes. Mi comprensión sobre varios asuntos también ha crecido y cambiado a lo largo de los años; espero que, al igual que Baruch, esto continúe sucediendo hasta el día en que muera. Sin embargo, me gustaría controvertir dos afirmaciones hechas por Baruch.

Primero, Baruch sugiere que logró desarrollar su nueva perspectiva y comprensión por cuenta propia, con poca influencia del trabajo que leyó de otras personas y de algunas con quien duró debatiendo muchas horas a lo largo de los años. Esta construcción no dialógica de sí mismo y del conocimiento tergiversa el proceso de adquisición de conocimiento y actitudes. Irónicamente, también debilita la razón de ser de la sociología pública, que le apunta a presentar hechos y análisis alternativos.

Segundo, Baruch sostiene que pudo llegar a ser un sociólogo público porque, a diferencia del resto de nosotros

al margen, obtuvo la confianza de ser considerado “uno de los nuestros”. En otras palabras, él era “legítimo” ante los ojos de las élites. Baruch sugiere que esto le permitió ser publicado en los principales periódicos israelitas (cosa que es indisputable), mientras que otras personas con análisis similares (por ejemplo, los miembros de la organización radical socialista y anti sionista, Matzpen) eran menos visibles en la esfera pública porque sus puntos de vista eran considerados ilegítimos. Esta legitimidad, según él, es una precondition para el trabajo efectivo de un sociólogo público.

Baruch sugiere que su aprobación contingente como “uno de ellos” se derivó en parte de los ataques que le hizo a libros como los de Jiryis y Lustick; un análisis que luego llegó a respetar. Pero esta visión nos deja con un gran dilema teórico (y político): ¿acaso uno debe “demostrar” ser un miembro de confianza ante la colectividad antes de poder acumular el capital social requerido para ser eficaz? ¿Qué sucede si el proceso de acumulación involucra atacar inicialmente la causa que uno más tarde busca defender?<sup>2</sup>

No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Dado el estado actual de la sociedad y las políticas israelitas (así como de otras partes de la región y del mundo en su conjunto) a menudo me siento cercana a la desesperanza, aunque trato de aferrarme a la política esperanzadora de Gramsci, su optimismo de la voluntad y su pesimismo del intelecto. Aunque Baruch haya empezado desde el centro, en lugar de los márgenes, llegó a sentirse igualmente frustrado y deprimido. Me encantaría escuchar de otros lectores de *Diálogo Global* acerca de dónde siente que los sociólogos públicos (y otros intelectuales públicos) deben posicionarse para poder ser eficaces. ■

Dirigir toda la correspondencia a Nira Yuval-Davis <[n.yuval-davis@uel.ac.uk](mailto:n.yuval-davis@uel.ac.uk)>

<sup>1</sup> Kimmerling B. (2013) *Marginal at the Centre: The Life Story of a Public Sociologist*. Nueva York y Oxford: Berghahn Books, traducido por Diana Kimmerling.

<sup>2</sup> La estrategia de muchos de nosotros en los márgenes “ilegítimos” ha sido, por un lado, trabajar como activistas públicos en una variedad de campañas específicas (a menudo impopulares) en Israel, así como establecer diálogos y lazos de solidaridad con palestinos y árabes con valores similares. Por otro lado, también ha sido trabajar por fuera de Israel y el Oriente Medio con defensores socialistas y de derechos humanos para así poder influenciar el apoyo internacional a Israel, público y gubernamental.

# > Una vida de compromiso crítico

## Entrevista con Issa Shivji



| Issa Shivji.

**I**ssa Shivji es uno de los grandes intelectuales públicos de la África poscolonial. Fue estudiante de derecho (1967-1970) en la Universidad de Dar es-Salam, creciendo en medio de investigadores de izquierda distinguidos tales como los sociólogos Giovanni Arrighi, Immanuel Wallerstein y John Saul. Estos investigadores venían de todo el mundo, atraídos por el fermento intelectual en formación en la universidad. Incluso siendo un estudiante precoz, Shivji comenzó a desafiar las políticas socialistas del régimen ujamaa de Julios Nyerere, el primer presidente de Tanzania. Durante este período inicial escribió obras tan célebres y ampliamente debatidas tales como *The Silent Class Struggle* [La Silenciosa Lucha de Clases] donde visibilizó a las fuerzas sociales que políticamente carecían de representación en las nuevas pos-colonias de África. Tras recibir los títulos de la London School of Economics y de la Universidad de Dar es-Salam, aceptó un puesto en la Facultad de Derecho que nunca dejó hasta que se jubiló en el 2006. Durante ese tiempo se ha convertido en una figura pública dedicada a la reforma agraria y al derecho constitucional. Él sobrevivió la turbulencia política a pesar de sus comentarios francos sobre

el giro hacia el neoliberalismo en la década de los ochenta y sobre la corporatización de la universidad. En el 2008 se le otorgó la posición de Julius Nyerere en la Cátedra de Estudios Panafricanos con la finalidad específica de restablecer la universidad como un centro de debate público. El profesor Shivji ha inspirado a muchos académicos jóvenes, tales como el profesor de ciencias políticas, Sabatho Nyamsenda, quien realizó esta entrevista. También fue un participante activo en el Congreso Mundial de la AIS en Durban, Sudáfrica (2006).

**SN:** *Su asociación con la Universidad de Dar es-Salam (también conocida como Mlimani, o la Colina) inició en 1967 como un estudiante de derecho, y luego de graduarse se unió a la facultad de derecho de la misma universidad (una posición que mantuvo por 36 años). ¿Por qué decidió permanecer en la Universidad mientras la mayoría de sus colegas progresistas se unieron a otras instituciones?*

**IS:** Es verdad, muchos de mis camaradas se unieron a otras instituciones incluyendo la Oficina de Servicio Nacional, el Partido e incluso el ejército. En retrospectiva, puede sonar un poco ingenuo, pero la verdad es que fue una decisión colectiva de mis camaradas sobre quién sería más efectivo en determinado lugar. Los camaradas pensaron, y yo estuve de acuerdo, que yo debería permanecer en la Universidad para realizar trabajo intelectual e ideológico progresista.

La Universidad sí brindó un espacio relativo para que las ideas progresistas florecieran, un terreno donde la camaradería intelectual progresista podía ser creada y sostenida. En ese momento, el compromiso nacionalista general combinado con el entendimiento intelectual más profundo del sistema imperialista ayudó a cultivar investigadores jóvenes radicales, muchos de los cuales se volvieron profesores en escuelas secundarias de modo que fertilizaban aún más el pensamiento progresista y su práctica.

>>

Nunca me he arrepentido de pasar toda mi vida trabajando en la Colina.

**SN: En su libro *Accumulation in an African Periphery [La Acumulación en una Periferia de África]* usted divide la experiencia poscolonial de los países africanos, en particular a Tanzania, en tres fases: la fase nacionalista (1960-1970), la fase crítica (1980) y la fase neoliberal (1990-hasta la actualidad). ¿Cómo afectaron estos cambios a Mlimani?**

**IS:** Las universidades existen en un entorno social y obviamente son afectadas por los cambios en ese entorno. La década de los ochenta fue un periodo extremadamente crítico para nuestro país así como, efectivamente, lo fue para el resto de África. Las universidades estaban hambrientas por recursos mientras que al mismo tiempo estaban expuestas a un asalto ideológico e intelectual incesante de prescripciones neoliberales. Muchos de nuestros colegas se fueron a universidades en el Sur de África (Lesoto, Botswana, Suazilandia y luego a Sudáfrica y Namibia).

Pero algunos lo aguantaron, incluyendo muchos investigadores radicales jóvenes que habían absorbido ideas progresistas durante las primeras dos décadas del fervor revolucionario nacionalista. Ellos continuaron haciendo muy buen trabajo. Por ejemplo, guiaron el lado intelectual del “gran” debate constitucional en 1983-1984 articulando posiciones anti-autoritarias y anti-estatales. Por supuesto, había tendencias distintas: aquellos que veían la democracia liberal, los derechos humanos y el multipartidismo como su meta final y por consiguiente exigían cambios esencialmente reformistas. Luego una tendencia minoritaria vio la lucha por la democracia como una escuela para acciones colectivas independientes; hacían un llamado para reformas revolucionarias. Para dar un ejemplo: Los reformistas exigían la instauración inmediata del sistema multipartidista mientras que los revolucionarios exigían, primero, una separación del partido y el estado, y segundo, un debate nacional prolongado que realizara un balance del periodo de pos-independencia y trazara y construyera un nuevo consenso nacional.

En la transición del periodo nacionalista al periodo neo liberal, la Colina aun era un semillero de debates y luchas ideológicas. Estas se esfumaron durante la tercera fase del gobierno al tiempo que se consolidaba el neoliberalismo en el país y la profesionalización y corporatización de la universidad tomaba impulso.

**SN: En 2008, usted fue nombrado como el primer titular de la cátedra Mwalimu Nyerere en Estudios Pan-Africanos, conocido como Kígoda en Kiswahili. Poco después de instalarse, usted fue citado diciendo que era “un honor” para usted “mantener el legado de Nyerere vivo”. ¿A qué legado se refería? Teniendo en cuenta el hecho que el Nyerere que usted describe en**

**sus textos es vehementemente un opositor al Marxismo y las luchas desde abajo.**

**IS:** Nyerere era un nacionalista radical. Él era un pan-africanista progresista y generalmente anti-imperialista. Sin duda, su anti-imperialismo no estaba fundamentado en la economía política radical, como sí lo estaba el de Nkrumah. Sin embargo, su postura pro-pueblo era consistente; su posición anti-imperialista era razonable y su nacionalismo era progresista.

En comparación con la clase política neo liberal que lo reemplazó, y consciente del caos que esta clase ha creado en nuestra sociedad, aflige a cualquier progresista, incluso un marxista, quien no quiera recordar el legado de Nyerere y utilizarlo como un recurso ideológico en la lucha contra la fase actual tan voraz del capitalismo.

Nyerere no era un marxista y tampoco se disfrazaba como tal. El mismo Marx exclamó: “¡yo no soy marxista!” al enfrentarse con el marxismo vulgar.

Como jefe de estado, es cierto que estuvo en contra de las luchas desde abajo. Pero, ¿eso significa que una persona progresista no debe celebrar el legado progresista de Nyerere y extraer lecciones de su carácter contradictorio? Mi amigo, un marxista no es un purista; ¡ella y él son políticas y políticos!

**SN: ¿A qué se refiere con el “carácter contradictorio” del legado de Nyerere?**

**IS:** No puedo hacer nada mejor que contar una anécdota del mismo Mwalimu. Unos meses después de que echó a unos estudiantes de la Colina por manifestar contra el estado en 1978, él visitó el campus. Un estudiante fue lo suficientemente valiente como para preguntar algo en efecto: “Mwalimu, usted habla de democracia pero cuando nosotros manifestamos por el interés de la democracia, ¡usted envió al FFU (Unidad de Fuerza de Campo) a golpearnos!”.

Mwalimu se quedó mirándolo, y luego respondió: “¿Qué esperaba?” Soy el jefe de estado; yo presido sobre la institución que ejerce el monopolio de la violencia. Si causan caos en las calles, claro que enviaré el FFU. ¿Pero eso significa que no deberían luchar por la democracia? ¡La democracia nunca se ha entregado en bandeja de plata! (No son sus palabras exactas).

Y todos aplaudimos. ¡Mwalimu pudo quedarse con su pastel y comérselo!

**SN: El revolucionario intelectual iraní Ali Shariati una vez apodó a las universidades como “fortalezas fortificadas invencibles”, cuya principal tarea es producir esclavos intelectuales para el mundo corporativo. El**

>>

**Kigoda, el Programa de Estudios Pan-Africanos, ¿consiguió abrir las puertas de las “fortalezas” de Mlimani, y vincular a sus intelectuales con las masas? Si fue así, ¿cómo lo hizo?**

**IS:** Sería insensato de mi parte afirmar que el Kigoda logró abrir las puertas de la “fortaleza” universitaria. En términos althusserianos, las universidades son parte del aparato ideológico del estado. Los intelectuales dominantes son sin duda productores y transportadores del conocimiento dominante, lo cual forma la base de las ideologías dominantes.

Pero por la misma naturaleza del proceso de producción del conocimiento, es necesario que haya un choque de ideas. Esto da espacio para las perspectivas que no son dominantes. No obstante, tales espacios no deberían darse por sentados. Tienen sus límites y, en momentos críticos, incluso esos espacios son suprimidos. Es una lucha para reclamar y reivindicar en una base constante esos espacios progresivos. Y como todas las luchas, estas luchas intelectuales también requieren imaginación respecto a sus formas y métodos.

Esto es todo lo que Kigoda intentó hacer; nada más. Tal vez logró causar un fervor intelectual; tal vez logró ganar alguna credibilidad con intelectuales y personas jóvenes; tal vez logró excavar archivos progresistas de la Colina. Incluso eso tenía sus límites, y aquellos límites comenzaron a mostrarse hacia el final de mi período.

Uno solo puede hacer hasta cierto punto dadas las circunstancias. Creo que fue E.H. Carr, siguiendo a Plekhanov y antes de él Marx, quien dijo que mientras los individuos hagan historia, ellos no eligen las circunstancias en las cuales la hacen.

**SN: Nyerere una vez advirtió a los oprimidos de no usar el dinero como su arma. Sin embargo, parece que la financiación se ha convertido en un aspecto central para los proyectos intelectuales hoy en día. Ningún trabajo se realiza sin dinero. Incluso las organizaciones más progresistas han encontrado inevitable el hecho de arrodillarse ante agencias capitalistas en busca de dinero. ¿Cómo ejecutaba sus actividades el Kigoda?**

**IS:** Sí, el dinero y los financiadores se han convertido en el motor de los proyectos intelectuales. Sin duda el Kigoda afrontó problemas de financiación, pero estableció ciertos

principios desde el inicio. Primero, todos los gastos administrativos, incluyendo los salarios del presidente y su asistente, saldrían del presupuesto regular de la universidad. Segundo, el Kigoda evitaba aceptar dinero de donantes extranjeros. Tercero, cualquier financiación dada por instituciones públicas nacionales u organizaciones intelectuales africanas conocidas sería sin ataduras. Finalmente, la agenda y actividades del Kigoda serían establecidas estrictamente por el colectivo Kigoda.

No fue fácil pero manteniendo nuestro modesto presupuesto, dependiendo en gran medida del trabajo voluntario y gastando con mucha prudencia, lo logramos.

**SN: Ahora que se ha retirado de la universidad, ¿cuáles son los proyectos que planea emprender?**

**IS:** Mientras aún estaba en la Universidad, junto a dos colegas, la profesora Saida Yahya-Othman y el Dr. Ng'wanza Kamata, emprendí un proyecto para escribir una biografía definitiva de Mwalimu Nyerere apoyados por la Comisión de Ciencia y Tecnología de Tanzania. En estos momentos prácticamente hemos terminado nuestra investigación (si es que se puede terminar completamente una investigación de este tipo) y acabamos de empezar el proceso de escritura.

Uno de los resultados importantes de ese proyecto es el establecimiento del Centro de Información Nyerere (NRC). El Centro tendrá un centro de documentación donde todo el material que recolectamos estará almacenado y disponible para los investigadores. Alrededor del Centro organizaremos actividades con miras a proveer una plataforma para pensamiento estratégico, debates y discusiones. Esperamos iniciar las actividades este año. Es mi esperanza que el NRC se convierta en una plataforma para reflejar muchos asuntos fogosos que enfrenta el país y el continente.

Siento que la cultura de las ONG y de consultoría neoliberal con su énfasis en políticas (más “acción”, menos reflexión) y pronóstico prescriptivo ha cobrado su precio en nuestro razonamiento intelectual, lo cual ha resultado en que hemos renunciado a analizar y entender el mundo. No podemos luchar por un mundo mejor sin entender mejor el mundo. Para eso, tenemos que tener un panorama más grande de la historia. Esperamos que el Centro contribuya a revivir la cultura de lo holístico, del pensamiento a largo plazo. ■

Dirigir toda la correspondencia a Sabatho Nyamsenda <[sany7th@yahoo.com](mailto:sany7th@yahoo.com)> e Issa Shivji <[issashivji@gmail.com](mailto:issashivji@gmail.com)>

# > Capitalismo vs justicia climática

por **Herbert Docena**, Universidad de California, Berkeley, EEUU y miembro del Comité de Investigación sobre Movimientos Sociales (RC44) de la AIS



*La Marcha de los Pueblos en Defensa de la Madre Naturaleza durante la cumbre de cambio climático de la ONU en Lima, liderada por movimientos sociales de alrededor del mundo pidiendo que "cambien el sistema, no el clima".*

*Foto por Herbert Docena.*

Como es tradición desde 1972, cuando la primera conferencia de la ONU sobre el medioambiente se llevó a cabo en Estocolmo, miles de personas de alrededor del mundo se reunieron una vez más en diciembre de 2014 para una "Cumbre de los Pueblos" alternativa. Marcharon por las calles de Lima (Perú) mientras cientos de representantes estatales se reunían dentro de un campamento militar para la última Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Los llamados de la "Cumbre de los Pueblos" fueron variados, como de costumbre. Algunos ondeaban pancartas de colores diciendo "¡hacemos un llamado por una ley de cambio climático seria!" o "¡no más discursos; actúen!"; exigencias que sugieren que hay o puede haber una armonía de intereses entre aquellos que marchan y aquellos reunidos en la conferencia oficial a unos catorce kilómetros de distancia, y que estos últimos podrían realmente aprobar una "ley de cambio climático seria" bajo el actual sistema.



Pero la petición más común que escuché (en efecto, el llamado expresado en la pancarta central detrás de la que todos marchaban), era “¡cambien el sistema, no el clima!”, junto con sus variaciones como “¡salven al planeta del capitalismo!”, o frases como “Capitalistas: ¡Asesinos!” o “COP: Nido de depredadores”. Estas peticiones implican que hay un antagonismo fundamental entre aquellos que hacen las demandas y aquellos a quienes están dirigidas, y que estos últimos son incapaces de “salvar el planeta” bajo el sistema actual.

Este llamado por un “cambio del sistema” ha sido realizado en años recientes en un creciente número de lugares alrededor del mundo: en la marcha de 400.000 personas en Nueva York el septiembre pasado, en la protesta más pequeña en Varsovia en la cumbre de la ONU en 2013, en la conferencia sin precedentes sobre cambio climático de la Asamblea de Movimientos Sociales en Cochabamba en 2010, en la cumbre de Copenhague en 2009, e incluso dentro de la cumbre de la ONU por el autoproclamado socialista presidente Evo Morales.

Su importancia en Lima fue, en parte, un reflejo del alto nivel de militancia en el continente donde se realizó la conferencia de la ONU este año. Pero su creciente resonancia más allá de Lima puede también ser una señal de un cambio más amplio en la conciencia e identidades de las personas alrededor del mundo y, con ella, un cambio más profundo en el balance más amplio de las fuerzas sociales alrededor de la crisis ecológica global. Indica la creciente inhabilidad por parte del bloque dominante del mundo de ejercer uno de sus poderes más potentes: la habilidad de establecer los términos y el lenguaje del debate al influenciar la forma en que la gente ve el mundo y se categoriza a sí misma.

Después de todo, desde los años setenta por lo menos, distintos grupos de funcionarios estatales, ejecutivos

corporativos y otros intelectuales han estado trabajando activamente (en formas diferentes y a veces contrarias) para hacer que cualquier exigencia de cambiar el sistema sea algo impensable e inexpressable. Han tratado hacer esto mediante la creación y difusión de ideologías o formas de ver el mundo que representan a los grupos dominantes del mundo como los “salvadores”, del planeta cuyos intereses están fundamentalmente en armonía con “el pueblo” y que son capaces de resolver la crisis al interior del capitalismo.

Confrontados de repente con un aumento inesperado de movimientos ambientalistas radicales que empezaron a culpar al *capitalismo* por los problemas ambientales globales y que en efecto cuestionaron su hegemonía o su afirmación de promover intereses universales, han sido forzados a entrar a una especie de lucha que a menudo ignoran los analistas del llamado “cambio ambiental global”: la lucha sobre cómo representar y darle sentido a este “cambio”.

A través de los aparatos de producción de conocimiento de la OCDE, el Banco Mundial, la ONU, y una constelación de ONGs y otras organizaciones de sociedad civil global, se empeñarían durante las siguientes dos décadas en contrarrestar, absorber y desviar las críticas ambientalistas radicales mediante el desarrollo y la difusión de discursos como el “desarrollo sostenible” o “modernización ecológica” que le echan la culpa de la crisis ecológica a las “fallas del mercado”, a “intereses creados” o sólo a la industria de combustibles fósiles (nunca al sistema entero), y que retratan al capital como “compañero” benevolente y responsable. A través de prácticas cotidianas e institucionalizadas (desde la forma en que calculan las emisiones por país en lugar de hacerlo por clase, hasta las maneras en que incentivan a los contaminadores en vez de castigarlos), han buscado inculcar una visión común en las personas: que el problema no es el sistema y el enemigo no es el capital.

En suma, las élites globales han estado trabajando para influenciar la cultura global o moldear el “sentido común” de las personas para contrarrestar las ideas introducidas por los movimientos radicales y neutralizar los antagonismos que fomentan. Y en mayor medida, han sido exitosos. Los alguna vez poderosos movimientos que por un momento sacudieron la hegemonía capitalista fueron empujados a los márgenes desde los setentas y ochentas. Quienes exigían un “cambio del sistema” fueron catalogados exitosamente como extremistas furibundos. En efecto, se hizo más fácil imaginar el apocalipsis que imaginar un “cambio del sistema”.

Sin embargo, en Lima y alrededor del mundo, un número mayor de personas (incluyendo a la célebre autora Naomi Klein, al Papa Francisco, y otras figuras influyentes) ahora están vinculando explícitamente el capitalismo al cambio climático, categorizando a los capitalistas como “depredadores” inescrupulosos e imaginando “alternativas sistémicas”. Todo esto indica que los hegemónicos no lograron prevenir por completo el resurgimiento de un movimiento contra-hegemónico, global y radical.

Hasta ahora, no obstante, como muestra el resultado de la conferencia de la ONU en Lima, este movimiento no es todavía lo suficientemente poderoso para prevenir que los grupos dominantes en el mundo avancen en su “solución” preferida a la crisis ecológica.

Incluso cuando nieguen que la crisis está intrínsecamente arraigada en el sistema (e incluso cuando oficiales y ejecutivos menos perspicaces nieguen la existencia de una crisis y se opongan incluso a las reformas más débiles), la vanguardia del capitalismo intentará dirigir la economía global desde sus posiciones privilegiadas en la OCDE, el Banco Mundial, las universidades, los departamentos de planeación de políticas públicas, etc. Estos líderes en realidad han tomado muy en serio los eslóganes



Personas de todo el espectro político inundaron el centro de Lima en una de las protestas internacionales de cambio climático más militantes en años.  
Foto por Herbert Docena.

de los ambientalistas radicales. Han estado trabajando fuertemente para “cambiar el sistema”, pero de manera que permanezca siendo fundamentalmente el mismo.

Amenazados por la crisis ecológica y los movimientos radicales, los intelectuales más visionarios que se encuentran alineados con la clase dominante han estado explorando y debatiendo durante los últimos 30 años sobre cómo llevar a cabo de mejor manera algún tipo de “administración global del medioambiente” con el fin de “planificar” o “regular” la explotación de la naturaleza por el capital.

Durante los últimos cinco años, muchos (en su mayoría, pero no exclusivamente, de países desarrollados) han coincidido en un enfoque común:

el de la “modernización ecológica” a través de la regulación neoliberal global, una “solución” que pretende 1) establecer normas que obliguen a que todos los gobiernos contribuyan al objetivo de reducir el número total de emisiones pero que en últimas le permite a cada gobierno decidir si hacerlo, cómo hacerlo y en qué medida; al mismo tiempo que 2) busca construir mecanismos de mercado (mercados de carbono, impuestos, etc.) que buscan “ponerle precio al carbono” y de esta manera persuadir al capital para que haga una transición hacia inversiones y tecnologías “bajas en carbono” y que les permita encontrar soluciones “rentables” para lograr sus metas.

Ciertamente los defensores de esta solución no han logrado ganar completamente el consenso de

las élites globales. Hay oposiciones desde el Sur Global. Muchas si no la mayoría de las élites gobernantes de los países en desarrollo han hecho campañas para una modernización ecológica alternativa a través de una regulación global más *socialdemócrata*, en parte porque su propia capacidad para asegurar el consentimiento a sus mandatos en casa depende de obtener concesiones del Norte. Con esta solución, los estados, actuando en concierto como una autoridad internacional, establecerían colectivamente toques al total de emisiones globales y llevarían a cabo políticas redistributivas globales al obligar directamente a los gobiernos a reducir sus emisiones y transferir recursos a los países en desarrollo, en lugar de esperar obtener estos resultados mediante el funcionamiento del mercado.



Pero los gobiernos de países en desarrollo, arruinados por sus debilidades y contradicciones internas, han demostrado año tras año ser incapaces (o estar indispuestos) de bloquear la solución de mercado propuesta por los países desarrollados y ganar apoyo a sus propias soluciones globales. A pesar de todas sus amargas peleas contra sus contrapartes de países desarrollados en las negociaciones, muchas élites gobernantes del Sur al final comparten el mismo objetivo: transformar el sistema de manera que se mantenga fundamentalmente igual.

El resultado es que los funcionarios de países desarrollados han avanzado gradualmente en establecer los fundamentos de un nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático, que se firmaría en París el próximo año y que empezaría a funcionar en 2020, bajo las premisas de una regulación neoliberal global. Pero es poco probable que este acuerdo reduzca drásticamente las emisiones a niveles que puedan evitar el cambio climático catastrófico o brindar recursos para lidiar con sus efectos. Estamos entonces yendo hacia un nuevo acuerdo que puede construir la vía al caos climático y a una nueva era de barbarie.

Pero hay esperanza. Después de todo, la habilidad del bloque dominante de imponer esta solución depende al final de su habilidad para desviar la resistencia, algo que, a su vez, depende de su habilidad de representarse a sí mismos como “compañeros”. Esto, a su vez, descansa

en poder convencer a los demás de que están promoviendo un interés universal y de que pueden resolver la crisis sin cambiar el orden existente, todo lo cual requeriría de sacrificios materiales que el bloque hegemónico no parece estar dispuesto a hacer. Un fracaso de los grupos dominantes del mundo en lograr respaldar sus declaraciones sólo traería más desilusión, ira y ansiedad, y ya estamos viendo señales de esto en los grupos de ambientalistas moderados que participaron en la “huelga” de las conversaciones en Lima y la aceptación creciente de la conclusión, a la que llegaron los movimientos desde 1972, de que quienes están dentro de la reunión oficial son incapaces de aprobar una “ley de cambio climático seria”.

Pero todavía no está claro si esta aparente crisis hegemónica se traduce en un movimiento capaz de movilizar la fuerza social requerida para contrarrestar la ausencia de soluciones al cambio climático por parte de las élites dominantes, si la desilusión y la ansiedad se convertirán en resistencia activa. Mucho depende de la capacidad de negociar hábilmente una tensión perdurable: entre la meta de llevar a la calle a cuantas personas de cuantas tendencias políticas y la meta de transformar su “sentido común” y sus subjetividades. Estas dos metas no siempre han sido congruentes porque forjar coaliciones amplias produce presiones para apuntar al “mínimo común denominador”, ser indulgentes con creencias dadas por sentadas, y hablar el lenguaje del “sentido común”, un lenguaje que refuerza el proyecto de

los dominantes en lugar de desafiarlo. Sin transformar el sentido común, incluso las coaliciones más amplias y las protestas más grandes pueden terminar simplemente ayudando a los poderosos en su objetivo de cambiar el sistema para poder dejarlo intacto.

Se necesita una estrategia que no ahuyente al público pero que tampoco se rehúse a atacar las categorías profundamente arraigadas y las formas de ver el mundo que se dan por sentadas y que motivan a las personas a confiar en el sistema. Esto implicaría organizar “la gran marcha” después y no antes de que las conversaciones de la ONU hayan terminado en París para así repudiar la idea de que “el pueblo” cuenta con que la sabiduría y la benevolencia de las élites mundiales salvarán al planeta. Esto requeriría cuestionar soluciones que enmarquen la crisis climática en términos de estados en lugar de clases, así suenen progresistas, como las propuestas de dividir el “presupuesto de carbono” entre países. Implicaría exhortar incluso a los gobiernos progresistas y socialistas a adoptar caminos de desarrollo que no sean extractivistas ni que sean dependientes en combustibles fósiles.

Habiendo tenido éxito en poner en la agenda el “¡cambien el sistema!”, la tarea ahora es hacerlo de manera persuasiva deletreando concretamente nuestras “alternativas sistémicas” y nuestras “fantasías concretas”. ■

Enviar toda la correspondencia a Herbert Docena <[herbertdocena@gmail.com](mailto:herbertdocena@gmail.com)>



# > Practicando sociología pública

por **Ariane Hanemaayer**, Universidad del Alberta, Canadá y Christopher J. Schneider, Universidad Wilfrid Laurier, Canadá



Ariane Hanemaayer y Christopher Schneider experimentan con la sociología pública.  
Foto por Ariane Hanemaayer.

**L**a premisa de la sociología pública es involucrar al público en un diálogo de educación mutua. Claramente, hay muchas maneras emocionantes de practicar la sociología pública. En este corto ensayo exploramos dos versiones “análogas” de practicar la sociología pública (para ejemplos “digitales” visitar la *Public Sociology, Live!* ó “e-public sociology” en Hanemaayer y Schneider, *The Public Sociology Debate*). La primera práctica involucra desarrollar un “café de filósofos” de sociología, al cual nos referimos como el *Sociological Sunday*. De aquí emergió nuestra segunda práctica, una versión de curso universitario de lo que habíamos

cultivado durante nuestros encuentros de *Sociological Sunday* en un café local. Los cafés locales – o “universidades del centavo” como eran llamados a veces (haciendo referencia al precio de la admisión de un centavo) – han servido históricamente como un importante entorno social donde han ocurrido intercambios por medio del diálogo entre múltiples públicos, incluyendo estudiantes, comerciantes e intelectuales.

Inspirados por la “universidad del centavo”, en el 2009 lanzamos el *Sociological Sunday* ([www.sundaysociologist.com](http://www.sundaysociologist.com)), esperando juntar individuos con diversas perspecti-



vas. Invitamos a miembros de la comunidad, a profesores y estudiantes para venir una vez al mes a un café local en el corazón de Kelowna, Columbia Británica, Canadá, para debatir y discutir problemáticas de interés mutuo (historias de noticias nacionales, videos virales, proyectos políticos, etc.). El objetivo de estos encuentros era llegar a poblaciones diversas, por un lado, y de involucrarnos en una educación mutua sobre asuntos de importancia local y global, por el otro. Las conversaciones usualmente incitaban debates provechosos y enérgicos, lo que ayudó a cristalizar, a dar forma y a desarrollar nuestras vidas como sociólogos públicos a partir de llamar la atención sobre problemas privados y asuntos públicos que iban más allá del aula universitaria.

Elegimos mantener nuestros encuentros el segundo domingo de cada mes temprano en la tarde. La programación reflejó un esfuerzo deliberado de atraer a aquellos con trabajos de tiempo completo que de lo contrario podrían estar ocupados trabajando entre semana. Publicitamos nuestro café de sociólogos mediante una página web gratuita. A los encuentros mensuales asistían varios profesores, estudiantes universitarios y de secundaria, personas pensionadas (así como un individuo, llamado Brendan, que se auto-identificaba como un “vendedor de aspiradoras” e “incauto”).

Aunque nuestro café sociológico fue nombrado por el día de la semana, nuestra esperanza era resaltar la idea de que no importa nuestro camino por la vida, nuestra persuasión política o social, todos reflexionamos sobre preguntas sociológicas en nuestras vidas (lo sepamos o no). A diferencia del químico profesional, los públicos viven en nuestros laboratorios (lo social los moldea y ellos moldean lo social). El germen de la imaginación sociológica ya está presente. Si la imaginación sociológica puede inspirar una tarde de domingo de reflexión, entonces el desarrollo de este tipo de pensamiento puede ser reconocido como una herramienta útil en la vida del público con el cual nos hemos encontrado en nuestras reuniones del café.

El Domingo Sociológico inspiró un curso financiado por la universidad con su propio plan de estudios. La idea era invitar a miembros del público a asistir un curso de sociología. Cada semana, un sociólogo invitado ofrecería una ponencia de una hora de una manera públicamente accesible, seguida por una hora de discusión por grupos (el curso se cerró con 30 estudiantes). El curso y cada conferencista invitado se anunciaban semanalmente mediante notas de prensa de la universidad y en las redes sociales (usualmente la asistencia semanal era alrededor de 100 personas). Se distribuían estudiantes de sociología y miembros del público entre los grupos de discusión con el fin de que participaran en un diálogo mutuo. Luego, junto

con los profesores de sociología y el profesor asistente, nos rotábamos entre grupos, para escuchar y para intervenir con material sociológico en el diálogo.

Algunas de las personas que frecuentaban el Domingo Sociológico asistían regularmente al curso. ¡Las reacciones eran muy entusiastas! Por ejemplo, Brendan, el auto-identificado como el vendedor de aspiradoras mencionó: “Ser capaz de hacer parte de estas conversaciones, y para mi asombro descubrir que tenía algo que aportar ha sido empoderante y energizante de una manera que nunca antes había experimentado”. Otro miembro del público mencionó: “Ha sido un privilegio y placer para una persona de un poco menos de 80 años, escuchar y mezclarse con mentes más jóvenes y animadas”.

Estas iniciativas en la sociología pública nos impulsaron a pensar acerca de nuestros compromisos y perspectivas sociológicas. Uno de los dilemas más frecuentes con el que nos encontramos fue cómo convertir las ideas sociológicas complejas en ideas relevantes y claras. Encontramos nuestro trabajo dentro de la comunidad como una adición exigente a nuestro trabajo profesional, pero una experiencia de enseñanza pública increíblemente gratificante. Hubo mucho apoyo por parte del público para nuestros proyectos, y encontramos que era alentador explorar nuevas e innovadoras formas de vincular las comunidades en nuestro trabajo. El contexto más amplio probablemente contribuyó al éxito de estos proyectos.

Kelowna es particularmente una comunidad de jubilados adinerada, un lugar muy deseable para vivir en el sur interno de la Columbia Británica. Muchos de los asistentes del público del Domingo Sociológico y del curso de Sociología Pública eran individuos adinerados y con pregrados. Por ejemplo, Joyce, una asistente regular del público del Domingo Sociológico y del curso, mencionó: “Se me había olvidado cuánto disfrutaba de la sociología universitaria en los setentas y ochentas y lo estimulada que me siento nuevamente”. Los intentos de desarrollar proyectos similares en comunidades de clase trabajadora de obreros, por ejemplo, se pueden topar con retos distintos. Nuestro proyecto dependía de supuestos específicos a la comunidad en la cual creamos estos proyectos: podíamos asumir que la mayoría de las personas podían acceder a computadores y a Internet, que escuchaban noticias locales y emisoras de radio con tendencias de izquierda que anunciaban los eventos, y que estaban motivados a vincularse a la universidad en diferentes competencias. Los sociólogos que esperan llevar iniciativas similares a sus propias comunidades podrían considerar los desafíos que pueden surgir en el entorno social en el cual estén trabajando, con el fin de diseñar estrategias mediante las cuales vinculen a los públicos en sus contextos específicos. ■

Dirigir toda la correspondencia a Ariane Hanemaayer <[ahanemaa@ualberta.ca](mailto:ahanemaa@ualberta.ca)> y Christopher J. Schneider <[cschneider@wlu.ca](mailto:cschneider@wlu.ca)>

# > Reivindicando el derecho a la ciudad

## La movilización popular urbana en Chile

por **Simón Escoffier**, Universidad de Oxford, Inglaterra



Un mural en Villa Francia, uno de los barrios contenciosos de Santiago. Foto por Nathalie Vuillemin.

**A** pesar de una larga historia de movilización social, desde 1990 los pobres urbanos de Chile han sido representados como actores políticos pasivos que sufren de segregación y patologías sociales. Sin embargo, basando en mi investigación en la comuna de Peñalolén de Santiago, sostengo que en algunos casos los pobres urbanos han sido capaces de organizar resistencia sostenible, reclamando su derecho a la ciudad.

David Harvey (2008: 23) define el derecho a la ciudad como “el derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad”. Conectando la urbanización al capitalismo, y en línea con una tradición académica que prioriza a las personas por sobre la ganancia, Harvey sostiene que los seres humanos merecen tener la capacidad de transformar los procesos de urbanización a través del ejercicio del poder colectivo. Para los habitantes pobres, ejercer el derecho a la ciudad a menudo involucra la defensa de su hábitat urbano y del acceso a los servicios y recursos de la ciudad, resistiendo a los procesos urbanos de acumulación capitalista.

Las explicaciones académicas más convencionales sugieren que, a través de una movilización colectiva consistente, los pobres urbanos de Chile han logrado reivindicar efectivamente su derecho a la ciudad; aunque a veces de manera más sistemática que otras. Las luchas colectivas sobre la vivienda por parte de los pobres urbanos en Chile pueden ser rastreadas hasta la década de 1920. El llamado “movimiento de pobladores”, en conexión con los partidos políticos y muchas otras instituciones, tuvo un papel central en la esfera política nacional, presionando al gobierno a través de la toma de tierras urbanas. Las ocupaciones de tierra se volvieron cada vez más populares entre 1957 y 1970, transformando las ciudades chilenas, especialmente Santiago. De hecho, en 1972, durante la administración de Allende, el 16.6% de la población de Santiago vivía en asentamientos informales (Santa María, 1973: 105).

Siendo territorio de organización de izquierda, muchos de estos asentamientos marginados fueron reprimidos por la dictadura militar (1973-1989). Algunos de esos barrios se volvieron baluartes de la resistencia de base y jugaron un papel crucial en las protestas nacionales que, desde 1983, expusieron la crueldad del régimen autoritario.

Luego de 1990, cuando Chile restauró su democracia, las prolíficas y coordinadas acciones de los pobladores desaparecieron de la literatura académica. Aunque a lo largo de los años ochenta varios centros de investigación le prestaron atención a la movilización popular (por ejemplo, la Universidad de Chile, PUC, CIDU, SUR, Flacso, Vicaría de la Solidaridad), las investigaciones académicas de los años noventa enfatizaron la desmovilización en vez de la acción colectiva y describieron estos asentamientos como nidos de delincuencia, tráfico de drogas y otros malestares sociales (Hipscher, 1996; Tironi, 2003).

La comuna de Peñalolén en Santiago – así como otras iniciativas que se desarrollaron en otras ciudades – ofrece un contraejemplo a estas narrativas de desmovilización. De hecho, los barrios populares de Peñalolén han sostenido iniciativas políticas contenciosas durante los últimos 25

>>

años, y no sólo han logrado reivindicar sus derechos sino que también han transformado directamente el entorno inmediato del comuna y sus residentes.

Exigiendo su “derecho a vivir” y organizados a través de la Coordinadora de Comités de los Sin Casa, casi 900 familias de distintas partes de Peñalolén invadieron terrenos de alto valor en la parte oriental del comuna. Así fundaron Esperanza Andina durante el invierno de 1992: la primera toma de terrenos del nuevo régimen democrático chileno. A través de una fuerte organización comunitaria, y rechazando la cooptación por parte de los partidos políticos y el gobierno, Esperanza Andina logró exigir con firmeza vivienda social dentro del hábitat urbano local (evitando así la relocalización periférica de la pobreza, usual en las políticas de vivienda social). Después de muchos años de luchas, conflictos y negociaciones, los pobladores obtuvieron los derechos de suelo para formalizar sus barrios, y adquirieron subsidios para construir casas en los mismos lotes.

La persistente demanda de vivienda, junto al rechazo de los pobladores de ser expulsados a las periferias urbanas, llevó a otra toma de tierras en Peñalolén en julio de 1999. “La Toma de Peñalolén”, como llegó a conocerse, fue claramente la toma de tierras más grande en Chile desde 1990. Dicha toma, que involucró a más de 1800 familias, presionó a las autoridades para que proporcionara subsidios de vivienda social al interior de la comuna. Aunque eventualmente los organizadores de la toma se separaron (la facción más radical fue excluida de las negociaciones), para el año 2006 cerca de 900 familias habían sido reubicadas en casas construidas en Peñalolén mientras que a la mayoría de los demás se les asignó lotes en otras comunas.

La lucha de Peñalolén en torno a la vivienda social se realiza hasta el día de hoy. En efecto, el Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL) (una organización de izquierda de base oriunda de Peñalolén) ha coordinado comités locales de vivienda para exigir el derecho a la vivienda social dentro del comuna.

Estos sucesos en Peñalolén han demostrado, sin embargo, que luchar por la vivienda social puede ser insuficiente para que los habitantes pobres reivindiquen derechos sustantivos a la ciudad. En 2009, los residentes y las organizaciones de base se enteraron que se iba a implementar un nuevo plan regulador en Peñalolén. El nuevo plan regulador buscaba renovar el comuna mediante el aumento del valor del suelo. Dicho plan planeaba cambiar la regulación del suelo para permitir la construcción de edificios, crear nuevas calles para mejorar el acceso en automóvil a la comuna y atraer más comercio. Además, el plan regulador

no incluía suficiente terreno para cubrir las necesidades de vivienda social de entonces en la comuna. Mientras que a algunos vecinos les pareció conveniente, la mayoría de las organizaciones populares de base rechazaron el proceso de gentrificación que se avecinaba. Estas organizaciones hicieron campaña contra el nuevo plan regulador e impulsaron un plebiscito comunal jurídicamente vinculante. Después de una contienda disputada entre el municipio y las organizaciones de barrio locales, el plan regulador fue rechazado democráticamente a finales de diciembre de 2011. Protegiendo a la comuna de la gentrificación, los habitantes pobres han logrado conservar el hábitat urbano que crearon a través de la ocupación y la construcción informal de los años sesenta y setenta.

Lo Hermida, uno de los barrios al oriente de Peñalolén, ha desarrollado una cultura de movilización contenciosa durante los últimos 25 años. Partiendo de valores comunitarios y de una identidad basada en la acción colectiva, los vecinos llevan a cabo diferentes iniciativas que les permiten reincorporar de manera colectiva las zonas locales que han sido cooptadas por otros actores sociales. Por ejemplo, los residentes organizan talleres de música o huertas comunitarias en las plazas públicas como una forma de re-significar y re-ocupar la zonas que han sido tomadas por traficantes de droga o amenazadas por compañías privadas.

Concentrando eventos históricos de participación colectiva, Peñalolén hace eco de muchas otras iniciativas protagonizadas por los pobres urbanos en Chile para reivindicar el acceso sustantivo de derechos en la ciudad (Sugranyes, 2010). Estas luchas demuestran que los pobres urbanos en Chile aún son capaces de crear organización colectiva, política, y sostenible, para así exigir su derecho a la ciudad. ■

Dirigir toda la correspondencia a Simón Escoffier  
<[simon.escoffier@sant.ox.ac.uk](mailto:simon.escoffier@sant.ox.ac.uk)>

<sup>1</sup> El movimiento de los pobres urbanos en Chile entre 1920 y 1989 se conoce tradicionalmente como “movimiento de pobladores”. El término “pobladores” ha adquirido históricamente un significado político en Chile: se refiere a los residentes pobres urbanos que luchan por sus derechos colectivos.

**Referencias**

Harvey, D. (2008) “The Right to the City.” *New Left Review* 53: 23-40. Tomado de <http://newleftreview.org/ll/53/david-harvey-the-right-to-the-city>.

Hipsler, P. (1996) “Democratization and the Decline of Urban Social Movements in Chile and Spain.” *Comparative Politics* 28(3): 273-297.

Santa María, I. (1973) “El desarrollo urbano mediante los ‘asentamientos espontáneos’: El caso de los ‘campamentos’ chilenos.” *EURE* 3(7): 103-112.

Sugranyes, A. (2010) “Villa Los Condores, Temuco, Chile Against Eviction and for The Right to the City,” pp. 145-148 in A. Sugranyes and C. Mathivet (eds.) *Cities for All Proposals and Experiences towards the Right to the City*. Santiago de Chile: Habitat International Coalition (HIC).

Tironi, M. (2003) “Nueva Pobreza Urbana, Vivienda y Capital Social en Santiago de Chile,” 1985-2001. *Revista de Sociología*. Santiago: Predes Editores.

# > Asentamientos informales y política en Uruguay

por **María José Álvarez Rivadulla**, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia y miembro de la Junta Directiva del Comité de Investigación sobre Desarrollo Urbano y Regional de la AIS (RC21)



*Un asentamiento precario en Montevideo que creció en los márgenes de una ocupación planeada anterior.*

*Foto por María José Álvarez Rivadulla.*

**M**ontevideo cambió drásticamente durante las últimas dos décadas del siglo XX: en la confluencia del neoliberalismo y la democratización, la capital de Uruguay creció cada vez más desigual y segregada. Quizá el cambio más visible (aunque sólo es la punta del iceberg) fue el crecimiento de los asentamientos informales.

Los asentamientos irregulares en Montevideo atravesaron cambios de tipo cuantitativo y cualitativo. Por un lado, el número de asentamientos creció de manera dramática y, por otro, se hicieron cada vez más planificados. Detrás de estos cambios sin duda encontramos condiciones estructurales tales como una desindustrialización persistente, la pobreza, el repliegue del estado, los salarios reales bajos y, quizá de manera más directa, la subida de los precios de los alquileres. Aún así, este panorama sigue incompleto a menos de que examinemos el rol de la política junto al de los cambios económicos; el aumento de invasiones de tierras también estuvo determinado por la democratización y la competencia electoral.

Aunque muchos piensan que los asentamientos irregulares surgen espontáneamente, como consecuencia “natural” de las duras condiciones económicas, una mirada más atenta a Montevideo revela la importancia de la organización y las redes que respondieron a oportunidades políticas como las elecciones o la descentralización.

En América Latina, el papel de los estados y la política en la conformación de asentamientos informales ha sido muy estudiado, en parte porque esta relación ha sido más fuerte que en otros lugares. Aún así, el caso de Montevideo se diferencia en la región porque las ocupaciones se dieron tardíamente. Aunque la formación de barrios informales por goteo, conocidos como *cantegriles*, ocurrió desde 1940, la capital uruguaya fue capaz de absorber a la mayoría de migrantes rurales que llegaron durante la industrialización por sustitución de importaciones, en la ciudad formal. Incluso en la década de 1980, a pesar de que había señales de una creciente desigualdad socioeconómica urbana, Montevideo seguía siendo más equitativa que otras ciudades del continente, tanto en términos económicos como espaciales.

Pero en los años noventa los asentamientos informales habían empezado a expandirse: para 1999 la mitad de los asentamientos informales de Montevideo tenían menos de quince años y alrededor de un tercio de estos nuevos asentamientos surgieron a través de tomas de tierra organizadas. Algunas invasiones planificadas tenían incluso una intención utópica, al menos al principio: los primeros residentes buscaban algo además de darle solución a necesidades básicas de vivienda. Sus líderes, que generalmente venían de facciones radicales de la

izquierda, veían estas invasiones planificadas como un tipo de reforma de tierras desde abajo, una crítica implícita a las políticas de vivienda estatales. Otras personas, menos utópicas, se organizaron de igual manera para tomarse la tierra, medir y distribuir los lotes, ayudarse mutuamente a construir sus casas, delinear las calles y los espacios públicos, resolver necesidades cotidianas, crear normas y hacerlas cumplir. Además, se organizaron para exigir servicios públicos, escuelas, centros de salud y la legalización de los barrios. Los asentamientos informales son quizá la manifestación más vital de acción política de parte de los pobres urbanos en Uruguay, así como Portes y Walton describieron en su libro *Urban Latin América [Latinoamérica Urbana]* para el resto del continente unos 30 o 40 años antes.

¿Qué hubo detrás de este cambio? La pregunta es especialmente intrigante en vista de que Montevideo no ha registrado un verdadero crecimiento poblacional: en otras partes los migrantes rurales son quienes usualmente habitan en asentamientos informales, pero no en esta ciudad. Muchos de los ocupantes ilegales de Montevideo vinieron de barrios establecidos en la ciudad formal. Se vieron obligados a mudarse en el momento de formación de nuevas familias o como resultado de las precarias condiciones de empleo vinculadas a la desindustrialización; otros fueron expulsados por los crecientes precios de alquiler.

No obstante, los factores económicos por sí solos no pueden explicar por qué algunos grupos y familias necesitadas decidieron invadir en determinadas circunstancias y no en otras más desesperadas; por ejemplo, durante la crisis económica de 2002. La política, y en particular la política electoral fue mediadora en el surgimiento y consolidación de los nuevos asentamientos en Montevideo, especialmente los que fueron planificados. El fin de la dictadura uruguaya y el surgimiento de la coalición izquierdista *Frente Amplio* como una tercera fuerza política que amenazaba con ganar (y que finalmente lo hizo en 1990 en Montevideo) aumentó la competencia electoral en la ciudad; esto amplificó los incentivos de todos los partidos para tolerar, e incluso facilitar, nuevas invasiones de tierra.

La mayoría de los líderes de los asentamientos organizados alrededor de los años noventa tenían vínculos con políticos de diferentes partidos. Aunque la mayoría insistía en que “aquí somos apolíticos”, de hecho eran híper-políticos. Durante el boom de formación de asentamientos, los líderes comunitarios podían por ejemplo dirigirse al Partido Colorado para conseguir que se repararan las calles porque el Ministro de Obras Públicas venía de ese partido; pero también mantenían vínculos con un concejal del Frente Amplio que pudiera proveer

información sobre los terrenos disponibles para ser ocupados mientras trataban de mantenerse en buenos términos con un diputado del Partido Blanco que visitaba el asentamiento.

Sin embargo, todos los actores de la ciudad eventualmente empezaron a darse cuenta que lo que parecía ser una solución de vivienda para familias necesitadas, o una forma de obtener votos para el partido, podría crear grandes problemas para el futuro. Las condiciones de vida eran precarias en los asentamientos informales y la provisión de servicios era demasiado costosa (al tiempo que en los barrios formales existen viviendas totalmente equipadas y deshabitadas). Los funcionarios municipales y los políticos fueron crecientemente consientes de este problema, lo cual ayuda a explicar por qué el número de asentamientos informales no se disparó durante la crisis económica de 2002 y por qué el presidente Mujica (generalmente sensible con la causa popular) intervino personalmente en un conocido desalojo de tierras en 2011. Adicionalmente, la competencia electoral por los votos de los pobres urbanos disminuyó cuando la izquierda ganó la presidencia por segunda vez en 2009.

Aunque la ola de invasiones de tierras en Montevideo tuvo una duración relativamente corta, sus consecuencias han dejado huellas urbanas y sociales duraderas.

Incluso durante el actual boom económico que atraviesa el país, los *asentamientos* todavía tienen un acceso reducido a servicios y viven un gran número de problemas sociales y económicos. El programa de mejoramiento y regularización de barrios ha sido extendido a muchos barrios nuevos, pero hay un límite a lo que puede hacer la infraestructura. No se pueden deshacer fácilmente veinte a veinticinco años: toda una generación de niños que nacieron en condiciones precarias y de pobreza segregada todavía carga con el estigma de venir de estos asentamientos informales, áreas que el resto de los habitantes de la ciudad identifican como zonas rojas.

Sin embargo se están haciendo cosas. Se están construyendo parques públicos bien dotados en áreas particularmente desfavorecidas, cerca de los asentamientos informales. Se están implementando nuevos programas de vivienda. Un incentivo tributario desencadenó la construcción de vivienda social en diferentes partes de la ciudad por parte de contratistas privados. Las cooperativas de vivienda también han ido creciendo. Aun así, la inclusión efectiva de estos asentamientos informales y sus habitantes sigue siendo uno de los desafíos más grandes de Montevideo. ■

Dirigir toda la correspondencia a María José Álvarez Rivadulla  
<[majo.alvarez.rivadulla@gmail.com](mailto:majo.alvarez.rivadulla@gmail.com)>

# > El crecimiento del Movimiento de los Trabajadores sin techo en Brasil

por **Cibele Rizek** y **André Dal’Bó**, Universidad de São Paulo, Brasil



Marcha de MTST en la Avenida Paulista, en el centro de São Paulo, exigiendo “más reformas populares, más derechos”.

**E**l Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) fue establecido a finales de la década de los noventa, uniendo a “trabajadores, obreros, trabajadores informales, personas con trabajos poco dignos y desempleados, quienes como millones de brasileños no tienen acceso a una vivienda decente, sino por el contrario viven bajo alquiler, en áreas riesgosas o en áreas con inseguridad urbana, localizadas

>>



principalmente en las periferias urbanas de Brasil". El MTST, hoy en día un actor enérgico en la política urbana de Brasil, organizó muchas manifestaciones en las calles que agitaron a la sociedad brasileña durante el último año, y sus dinámicas organizacionales ofrecen una perspectiva única para analizar los debates políticos del país.

De manera importante, este movimiento tiene diferencias significativas con los movimientos de vivienda que surgieron en la década de los ochenta, que ahora están alineados con el gobierno federal liderado por el *Partido dos Trabalhadores (PT)*. Aunque inicialmente el MTST fue vinculado al Movimiento Sin Tierra (MST, básicamente un movimiento de inserción agraria), el Movimiento de Trabajadores Sin Techo fue fundado durante la Marcha Popular Nacional de 1997, cuando los activistas de los movimientos sin tierra estuvieron comprometidos en la ocupación urbana del Parque Oziel en Campinas, en el estado de São Paulo. La primera ocupación realizada por el MTST, llamada Anita Garibaldi, fue organizada cinco años después en Guarulhos.

Desde esa primera ocupación, el MTST ha organizado por lo menos diez ocupaciones grandes en las regiones metropolitanas de São Paulo y Campinas, incluyendo campamentos llamados Chico Mendes (Taboo da Serra, 2005); João Candido (Itapecerica da Serra, 2007); Frei Tito (Campinas, 2007); Jesus Silverio (Embu das Artes, 2008); Zumbi dos Palmares (Sumaré, 2008); Dandara (Hortolandia y Santo André simultáneamente, 2011); y el Novos Pinheirinhos (Santo André y Embu das Artes, 2012).

En junio del 2013, Brasil experimentó un proceso intenso de protestas populares callejeras, marcando el fin de un largo período de desmovilización popular vinculada a los cambios de la política neoliberal. No es casualidad que el MTST ha estado cada vez más activo, teniendo enfrentamientos casi diarios con constructoras privadas, con el mercado de bienes raíces y el estado. En adición a las frecuentes protestas públicas, entre junio del 2013 y agosto del 2014, han incrementado exponencialmente las ocupaciones de tierras abandonadas e inactivas y de edificios inspiradas por el MTST en São Paulo y otras áreas metropolitanas: más de 100 acciones han sido registradas a través de Brasil durante los últimos doce meses.

Brasil sufre de un crecimiento en la escasez de viviendas, con un déficit en áreas metropolitanas incrementando un diez por ciento entre 2011 y 2012. Miles de familias brasileñas son desahuciadas de sus hogares diariamente debido a los precios explosivos de la tierra, de los bienes raíces y de las rentas, características del ciclo actual del boom del mercado de bienes raíces. Este déficit de viviendas incluso ha ocurrido mientras el gobierno brasileiro

implementa el programa de viviendas públicas más grande de la historia del país. Junto a otros programas sociales, el programa conocido como "Mi Casa Mi Vida" [*Minha Casa Minha Vida*] ha contribuido al crecimiento económico, mediante la promoción de la creación de empleos, y acceso al consumo y a servicios anteriormente restringidos a las clases de ingresos altos. Sin embargo, irónicamente, el programa de vivienda social también ha fortalecido la segregación y exclusión urbana, pues no ha ayudado a los brasileiros más pobres a instalarse permanentemente en regiones centrales de la ciudad ni ha brindado los servicios e infraestructura necesarios para la vida cotidiana de los nuevos residentes de las periferias urbanas en expansión.

En este contexto, las protestas del Movimiento de Trabajadores Sin Techo han jugado un rol esencial en moldear la política urbana brasileira. Sin embargo, los vínculos cada vez mayores del movimiento al programa de viviendas sociales del gobierno han complicado su postura: las negociaciones sobre las ocupaciones han situado simultáneamente al movimiento "dentro" y "fuera" de los debates de políticas del gobierno.

Esta ambigüedad se puede ver más clara en el resultado de las ocupaciones del movimiento. Una vez una ocupación del MTST abre las negociaciones con una municipalidad, se les solicita a las autoridades de la ciudad expropiar la tierra ocupada (y luego, frecuentemente, el MTST hace un llamado para incluir a las familias involucradas en la ocupación en el programa de viviendas sociales del gobierno). Pero las nuevas viviendas sociales pueden contribuir a la segregación espacial, teniendo en cuenta que las viviendas para los pobres inevitablemente están construidas generalmente en periferias urbanas, promoviendo la exacerbación de la desigualdad espacial.

El MTST se encuentra envuelto en una posición ambigua. Incluso cuando los activistas negocian los cupos en el programa de viviendas (una política pública implementada por el mercado de bienes raíces), sus ocupaciones y protestas callejeras siguen siendo reprimidas violentamente mediante desalojos, arrestos e incluso asesinatos. Así, el Movimiento Sin Techo continúa ilustrando lo que de otra forma podría permanecer oculto bajo las políticas sociales brasileiras: el carácter injusto y desigual de las ciudades de Brasil, la naturaleza parcial de los cambios y programas sociales y el conflicto y lucha política en desarrollo incluso luego de doce años de predominancia del Partido de Trabajadores. Y tal vez lo más importante, como un protagonista en las luchas sociales de Brasil, el movimiento personifica la esperanza de un futuro más justo e igualitario para las poblaciones urbanas empobrecidas de Brasil. ■

Dirigir toda la correspondencia a Cibele Rizek <[cibeleSr@uol.com.br](mailto:cibeleSr@uol.com.br)>

# > Protestas de los pobres en Sudáfrica

por **Prishani Naidoo**, Universidad de Witwatersrand, Sudáfrica



Residentes de Orlando en Soweto protestan por la exclusión de su comunidad en proyectos de construcción antes del Mundial de Fútbol de 2010. Foto por Nicolas Dieltiens.

**L**a narrativa dominante de los primeros veinte años de la democracia electoral no racista de Sudáfrica hace énfasis en los logros de las instituciones políticas formales, actores, políticas y procesos formados y activados durante este período. No obstante, lo informal se entromete constantemente, tal vez de manera más estrepitosa en forma de protestas que emergen en primera instancia fuera de cualquier partido político, de organización o sindicato, en medio de personas pobres que se juntan alrededor de problemas comunes que enfrentan día a día en su vida cotidiana.

Las luchas de aquellos asentamientos y municipios informales (lugares establecidos por planificadores del apartheid para atrincherar las condiciones de vida de la “informalidad permanente” para las personas negras) tienen un significado particular. Tales condiciones eran imaginadas como necesarias para mantener a las personas negras en sus posiciones subordinadas y “fuera de problemas”. Después de todo, fue como respuesta al asentamiento ilegal de las personas negras en áreas urbanas que a través de los años el estado apartheid se vio forzado a desarrollar políticas enfocadas a controlar el movimiento de personas negras (concebido solo como un trabajo barato). Estas incluían el mismo establecimiento de “pueblos informales” y municipios. Pero también fue desde y dentro de estos espacios que las luchas contra el apartheid florecieron, y fue cultivada una imaginación sobre planes de vida diferentes (aparte del apartheid).

Hoy en día, más de veinte años después del desmantelamiento formal de las instituciones y políticas del apartheid, la informalidad continúa caracterizando las vidas de un gran número de pobres en Sudáfrica. Viven en asentamientos (que aún crecen) en los cuales las condiciones del estilo de vida del apartheid persisten. No es de extrañar, entonces, que desde finales de la década de los noventa, al menos cada invierno (pero en aumento a través del año), los residentes pobres de los pueblos y asentamientos informales se toman las calles y autopistas locales para exigir un acceso adecuado a los recursos necesarios para una calidad de vida decente y estándar, incluyendo agua, electricidad y viviendas decentes (servicios básicos). Esto se ha convertido en una característica cada vez más común en la vida de Sudáfrica, con una primera expansión pequeña a principios del 2000 y una tasa de proliferación más alta desde el 2004.

Desde 1997, se reportaron a lo largo del país incidentes aislados de grupos de residentes pobres protestando porque les cortaron los suministros de electricidad y agua en los hogares. En los siguientes tres años, tales reportes se volvieron mucho más comunes mientras que las comunidades pobres sintieron los efectos del auge de la implementación de distintas formas de privatización, unidas a la

pérdida de trabajos y la flexibilización laboral (el resultado de una agenda de política pública macro económica neoliberal adoptada por el gobierno del CNA en 1996). Los cortes de agua y electricidad y el desalojo de viviendas incrementaron mientras los municipios reforzaron una lógica de pago de los servicios básicos. Los residentes afectados se juntaron para rechazar las condiciones impuestas sobre ellos, que resultó en varias formas de protesta (desde marchas y piquetes, hasta rechazar la entrada de funcionarios a los lugares de trabajo, dañar propiedad oficial y hacer reconexiones ilegales del suministro de agua y electricidad). En estas luchas ellos colaboraron con otros activistas independientes quienes estaban empezando a identificar un enemigo en común a través de luchas aparentemente distintas y separadas (un enemigo en común que nombraban “neoliberalismo”).

Para el 2001, las acciones sostenidas y críticas de los grupos involucrados conllevaron a los analistas a proclamar que hay una emergencia de “nuevos movimientos sociales y comunitarios”, cuyo significado se basa en que fueron los primeros movimientos pos-1994 en situarse fuera del (y en posición antagónica al) CNA y el movimiento más amplio del Congreso. En un influyente libro publicado en 2002 con el título *Somos pobres [We Are Poor]*, el sociólogo Ashwin Desai proclamó el nacimiento de un sujeto político nuevo, “los pobres”, nacido en las luchas de las comunidades organizadas (junto a estudiantes, académicos, investigadores y otros activistas independientes) para luchar contra los varios efectos de la adopción de políticas neoliberales de la ANC.

Para 2004, muchos de estos movimientos habían entrado en un período de declive. Los efectos acumulados de la represión estatal, las luchas políticas intra-organizacionales y las dificultades para acceder a recursos cobraron su precio en los colectivos impulsados principalmente por la energía y compromiso de sus miembros (la mayoría desempleada y pobre). En muchos casos, las mismas respuestas del estado a las exigencias de los movimientos terminaba en la parálisis del movimiento. Irónicamente, el 2004 también fue el año que marcó el inicio de una proliferación de luchas aún más grandes, muy parecidas a aquellas popularizadas por los nuevos movimientos de principios de la década del 2000. Una vez más, el ámbito informal de las políticas se entrometería, ya que las respuestas formales a las primeras luchas no satisficieron las necesidades de todos.

De hecho, la proliferación de protestas a nivel local lideradas por personas pobres fuera de cualquier estructura política formal desde el 2004 ha sido tan impactante como para que el sociólogo Peter Alexander la describa como “la rebelión de los pobres”. También se ha visto a los medios de comunicación influyentes acuñar y popula-

rizar el término “protestas por prestación de servicios públicos” como un abreviatura para tales acciones. Aunque una pobre “prestación de servicios” (incluyendo servicios básicos y la provisión de infraestructura) casi siempre está en el núcleo de estas protestas, los consejeros corruptos, la gestión inadecuada de fondos y bienes comunes y la comunicación deficiente entre municipios y sus residentes son con frecuencia los catalizadores para la acción. Para el 2012, las protestas se llevaban a cabo con el ritmo de por lo menos una vez al día.

En muchos casos, las protestas solo estallan una vez los residentes han agotado los canales oficiales y no han recibido respuesta de su municipio. En una recopilación de estudios de caso titulado El humo que llama [The Smoke That Calls], publicado por Karl Von Holdt et al. en el 2011, los manifestantes afirman que a veces la única manera de llamar la atención de las autoridades relevantes es incendiar propiedad o quemar llantas en barricadas (para hacer “el humo que llama”). Cada vez más acciones de esta naturaleza han resultado en el aumento del uso de la etiqueta “protestas violentas por prestación de servicios públicos” por parte de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, las acciones de la policía se han vuelto cada vez más violentas: los periódicos reportan la muerte de al menos 43 manifestantes a mano de la policía desde el 2009.

Hoy en día las protestas también son vinculadas a las diferencias entre las estructuras locales del CNA y sus formaciones alineadas. Esto se ha visto en la movilización de grupos de miembros del CNA contra sus propios líderes electos en los municipios. A veces estas resultan de las batallas perdidas dentro del partido o el estado, y a veces para exponer y cuestionar las mismas formas de patronazgo del estado y acceso a medios para el auto-enriquecimiento (mediante licitaciones, acceso a trabajos y financiación). Así como las divisiones dentro del CNA se desenvuelven, será interesante ver cómo nuevos actores políticos como Los Combatientes por la Libertad Económica (FEP) y el Frente Unido (lanzado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Metalúrgicos junto con otras formaciones comunitarias y de la sociedad civil) se relacionarán con estas luchas locales de los pobres.

Aunque los actores políticos tienden a dirigir toda la atención al ámbito de la política formal (partidos y parlamento), la informalidad continúa presentándose como un escenario de impugnación a nivel local. Aquí es donde reside el potencial de las formas alternativas de participación y producción. Sin embargo, mucho depende del potencial y compromiso colectivo para visualizar la política de forma distinta. ■

Dirigir toda la correspondencia a Prishani Naidoo  
<[Prishani.Naidoo@wits.ac.za](mailto:Prishani.Naidoo@wits.ac.za)>

# > Zambia: desalojos sin movimientos sociales

por **Singumbe Muyebe**, Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica



*Mientras los residentes desalojados discuten sus opciones, un niño se para sobre los escombros de una de las casas demolidas durante un desalojo en Chinika, Lusaka, llevado a cabo por tropas del Servicio Nacional de Zambia.*

*Foto por Emmanuel Tembo.*

**E**n abril de 2013, quince vehículos acorizados y policías se tomaron el lote 10144 en Lusaka occidental. Los desprevenidos residentes se despertaron ante la conmoción de estar siendo desalojados. No pudieron hacer nada más que mirar pues estaban siendo amenazados con armas. La policía demolió 33 casas. Cerca de 365 personas se quedaron sin hogar, muchas de los cuales habían ocupado esa tierra por veinte años. Algunos desalojados eran oficiales de policía de bajo rango. No hubo aviso previo del desalojo; ni el

Consejo ni los tribunales hicieron presencia. Tras el desalojo, los oficiales de policía de alto rango se apropiaron de las tierras para ellos mismos. Hubo más desalojos y demoliciones en el transcurso del mes. Frustradas, las familias desalojadas marcharon en solidaridad hasta la oficina del vicepresidente pero fueron detenidas y dispersadas por la policía armada. No tenían un permiso de la policía, un requerimiento del Acta de Orden Público. Los desalojados no tenían a quién recurrir sino a sí mismos. ¿Por qué no fue esto suficiente para empezar un movimiento para prevenir el desalojo

de tierras y por qué los movimientos sociales de vivienda que existen fueron incapaces de proteger a los desalojados? Aquí exploro unas posibles respuestas a estas preguntas.

El caso de Lusaka occidental no fue único. Han ocurrido desalojos de cientos de hogares sin inspirar la acción organizada. Sólo en 2014 ocurrieron varios en Lusaka; catorce casas fueron demolidas en Kanyama el 25 de julio, cien casas fueron demolidas en Chinika el 3 de octubre y el 18 de noviembre el ejército desalojó a los pobladores de Mikan-

>>

go. La política de demoler viviendas construidas de manera ilegal en tierra privada o pública empezó con un anuncio del gobierno zambiano en 2007. Desde su llegada al poder en 2011, el gobierno del Frente Patriótico ha continuado erradicando asentamientos ilegales e incluso algunos asentamientos renovados que habían adquirido ese estatus como parte del esfuerzo de gobiernos anteriores. No se han seguido los procedimientos legales en el proceso de demolición, y en algunos casos estos desalojos han resultado en muertes. Esto sólo ha suscitado preocupación pública.

Estas condiciones son suelo fértil para la movilización social; el 70% de la población urbana vive en tugurios, lo que significa que Zambia tiene una población que puede llegar fácilmente a una masa crítica; y el país tiene una historia fuerte y documentada de protestas y acciones colectivas.

¿Cómo explicar la ausencia de protestas? Primero, hay una larga historia de intolerancia por parte de las élites políticas que empieza con el mantenimiento del Acta de Orden Público de 1955. El Acta fue usada por la administración colonial inglesa para imponer control sobre quienes combatían por su libertad. Los presidentes posteriores nunca la han derogado. El Acta obliga a que los manifestantes obtengan un permiso a través de la policía y el Ministerio de Asuntos Interiores. Sin embargo, es muy imprecisa en cuanto a las bases para otorgar los permisos. Sólo pueden ser obtenidos siete días antes del día de la protesta. Estos permisos no suelen ser entregados cuando la causa está por fuera de lo que se reconoce bajo la ley o cuando hay oposición por parte de las élites políticas. Además, la ley no reconoce los derechos de posesión de facto, así que los que son desalojados de estos asentamientos no tienen respaldo jurídico

para protestar, a pesar de haber vivido en esa tierra por muchos años.

No es sólo el carácter reaccionario de la élite política lo que contribuye a la ausencia de protesta, sino también el miedo a las consecuencias de protestar sin un permiso. La violación del Acta de Orden Público suele estar acompañada del uso de brutalidad policial, lo que suscita miedo incluso entre los habitantes de los asentamientos renovados. Por ejemplo, durante los desalojos forzados en Kampasa, cerca al aeropuerto, el 14 de junio de 2013, el Servicio Nacional de Zambia disparó de muerte a dos hombres e hirió a uno más. Mis entrevistados en George, el asentamiento renovado, estaban preocupados por los desalojos recientes y temían por su propia situación a pesar de que tenían un grado de seguridad en la tenencia a través de las licencias de ocupación. Cuando les pregunté qué harían en caso de que el gobierno llegara a embargar sus tierras, ellos sintieron que irían a tener que ceder la tierra y tratar de encontrar otro lugar donde ir.

El gobierno y la sociedad civil han sido incapaces de proteger a los potenciales desplazados debido a la escasez de recursos financieros. El derecho a la vivienda no está consagrado en la constitución porque, como argumentaba el presidente Mwanawasa en 2008, el gobierno tendría que dedicar recursos financieros para garantizar el cumplimiento de ese derecho, recursos que el gobierno dice no tener. De esta manera el gobierno se ha rehusado públicamente a la obligación de compensar a los desalojados. En lugar de destinar recursos a la renovación de asentamientos informales, es más barato demolerlos simplemente.

La sociedad civil también carece de los recursos financieros para proteger

a estos habitantes ilegales del desalojo. Aunque hay una fuerte presencia de la Alianza de Tierras de Zambia y de Homeless International a través de una organización llamada El Proceso de las Personas sobre Vivienda y Pobreza [*The People's Process on Housing and Poverty*] en Zambia que, en principio, debería asumir la lucha contra los desalojos, no lo hacen en realidad. "Muchas veces la alianza no ha podido movilizar a las comunidades o hacerse cargo de los casos de interés público como se esperaba por culpa de la falta de capacidad y de recursos para hacerle seguimiento a los casos" (Alianza de Tierras de Zambia, 2014, <http://www.zla.org.zm/?p=9>). En 2010, las acusaciones de corrupción llevaron a la suspensión del desembolso de ayuda internacional tanto al gobierno como a las organizaciones de sociedad civil, lo cual llevó a la interrupción abrupta de muchos proyectos por casi dos años. Así, estas organizaciones sólo van tan lejos como emitir comunicados o amenazar con manifestaciones que no tienen un seguimiento real.

En resumen, los dos principales desafíos al surgimiento de un movimiento anti-desalojos en Lusaka y de nuevos movimientos sociales en Zambia son, primero, la hostilidad abierta ante cualquier forma de protesta por parte de las élites políticas y, segundo, los limitados recursos financieros con los que cuenta el gobierno y la sociedad civil para resolver el problema de vivienda. Una vez las personas han sido desalojadas, no ven oportunidades de ser compensados así que la protesta colectiva no tendría sentido. Sólo cambios en la ley entorno al orden público y un mayor crecimiento económico podrían proporcionar condiciones para que pueda surgir un movimiento anti-desalojos. ■

Dirigir toda la correspondencia a Singumbe Muyeba <[singumbe.muyeba@uct.ac.za](mailto:singumbe.muyeba@uct.ac.za)>

# > Fablabs y Hackerespacios La creación de una nueva cultura

por **Isabelle Berrebi-Hoffmann**, **Marie-Christine Bureau** y **Michel Lallement**, LISE-CNRS,  
Conservatoire national des arts et métiers, París, Francia



*Un hackerspace típico.  
Foto por Michel Lallement.*

**L**as nuevas formas de compartir, así como las nuevas maneras de la producción colaborativa y de consumo, están generando dudas para la economía actual. Los fablabs y los hackerspacios tienen un lugar particular en este contexto donde la riqueza inspirada en bienes públicos (commons) está basada en el acceso y el uso en lugar de la propiedad. Estos espacios

>>

de manufactura colectiva, que aparecieron a mediados de los 2000, están introduciendo una nueva ética de trabajo: una cultura de creadores. Dispersos por todo el mundo, estos espacios tienen distintos nombres: fablabs (laboratorios de fabricación), hackerespacios, creaespacios, laboratorios vivos, talleres de tecnología, entre otros. Son una invitación a redescubrir el placer de poner varios objetos juntos, de codificar software, o simplemente de imaginar nuevos estilos de ropa y cocina. Alrededor del globo, las grandes metrópolis le dan la bienvenida a estos nuevos espacios que simultáneamente promueven nuevas formas de manufactura, colaboración, consumo y aprendizaje.

Una impresora 3D a menudo es el centro de atención en estos sitios, pues permite la producción de cualquier objeto, usando planos que se encuentran en Internet. Aunque los resultados todavía son modestos, el progreso es increíble. Muchos de estos espacios también tienen equipos profesionales como máquinas de control numérico: cortadores, cortadores de láser, impresoras de serigrafía. Solo hace pocos años se necesitaban meses de entrenamiento para operar con éxito una de estas máquinas para crear prototipos. Hoy, el entrenamiento para usarlas correctamente sólo toma unas horas. Más aún, los precios de las máquinas y el software de diseño han disminuido considerablemente. Entonces, justo como las computadoras personales nos permiten navegar el mundo tecnológico, los fabricantes personales le permiten a cualquiera involucrarse con mundo físico.

Sin embargo, aun si comparten valores comunes, los laboratorios de fabricación en Barcelona, Berlín, San Francisco, París o Beijing no son parecidos. Los fablabs fueron fundados en MIT (Massachusetts, EEUU) a principios de los 2000, y han formado una red mundial. Los hackerespacios tienen una historia distinta. Sus orígenes yacen en California a principios de los setentas con el Homebrew Computer Club, una incubadora donde los aficionados se juntaban a explorar e inventar tecnologías de la información. Algunos compartían sus hallazgos de forma gratuita, mientras que otros, como Steve Jobs y Bill Gates, tomaron una ruta capitalista más tradicional. Forjados con espíritu hacker, los hackerespacios no son distintos de los fablabs desde una perspectiva organizacional. Incluso si las prácticas de codificación son más avanzadas en estos lugares, los hackerespacios están equipados de manera similar con materiales para que los individuos manufacturen, inventen, jugueteen con distintos objetos y creen algo. Más aún, así como con los fablabs, el acceso público es un criterio importante, también la voluntad de hacer de estos espacios no sólo sitios de innovación y manufactura sino también lugares para el aprendizaje colectivo y compartir conocimiento.

Los laboratorios de fabricación están parcialmente anclados en los territorios donde están ubicados. Operan en redes que dibujan los contornos de nuevos ecosistemas productivos. Algunos observadores los consideran el inicio de una nueva revolución industrial o el avant-garde de una salida civilizada del capitalismo. Pero no se necesita ir tan lejos para darse cuenta de que estos nuevos mundos deben tomarse en serio. Estos espacios están cargados con múltiples innovaciones a niveles técnicos, políticos y organizacionales. Aunque puedan estar localizados en los márgenes de la economía dominante, su creciente éxito es indicativo de cambios socioculturales en las maneras en que la gente trabaja, diseña, produce, toma decisiones y ejecuta acciones.

Los sociólogos que han empezado a estudiar estos nuevos lugares de producción muestran que aunque estos espacios son heterogéneos, tienen un modo compartido de organización, parcialmente tomado de comunidades de desarrolladores y hackers. La cultura fomentada por el mundo libre/de código abierto, fundado hace un par de décadas, introdujo nuevas formas de trabajar y colaborar que se basan en redes igualitarias y horizontales. También desarrollaron nuevas maneras de compartir bienes y servicios, por ejemplo, a través de la licencia Copyleft<sup>1</sup>. El movimiento de creadores, que incluye a los laboratorios de fabricación, también tiene su inspiración en una tradición crítica de la sociedad industrial, iniciada por William Morris en el mundo del diseño.

Una reciente encuesta en hackerespacios que llevamos a cabo al norte de California mostró que estos mundos alternativos de creadores están hechos principalmente para jóvenes blancos educados en sus treintas, desencantados con la academia. Estos espacios, frecuentados tanto por ingenieros de Google y *techies* sin hogar, tienen un objetivo: hackear, es decir, innovar al involucrarse con computadoras, objetos físicos e incluso la sociedad general. Algunos *creadores* participan activamente en procesos de innovación para el Silicon Valley, mientras que los más radicales invierten su energía al servicio de aquellos que desafían el orden establecido, como el movimiento *Occupy*. En un momento de crisis estructural generalizada, es importante examinar estos espacios alternativos, utopías reales donde se están inventando nuevas formas de trabajar, tomar decisiones, consumir y vivir juntos. ■

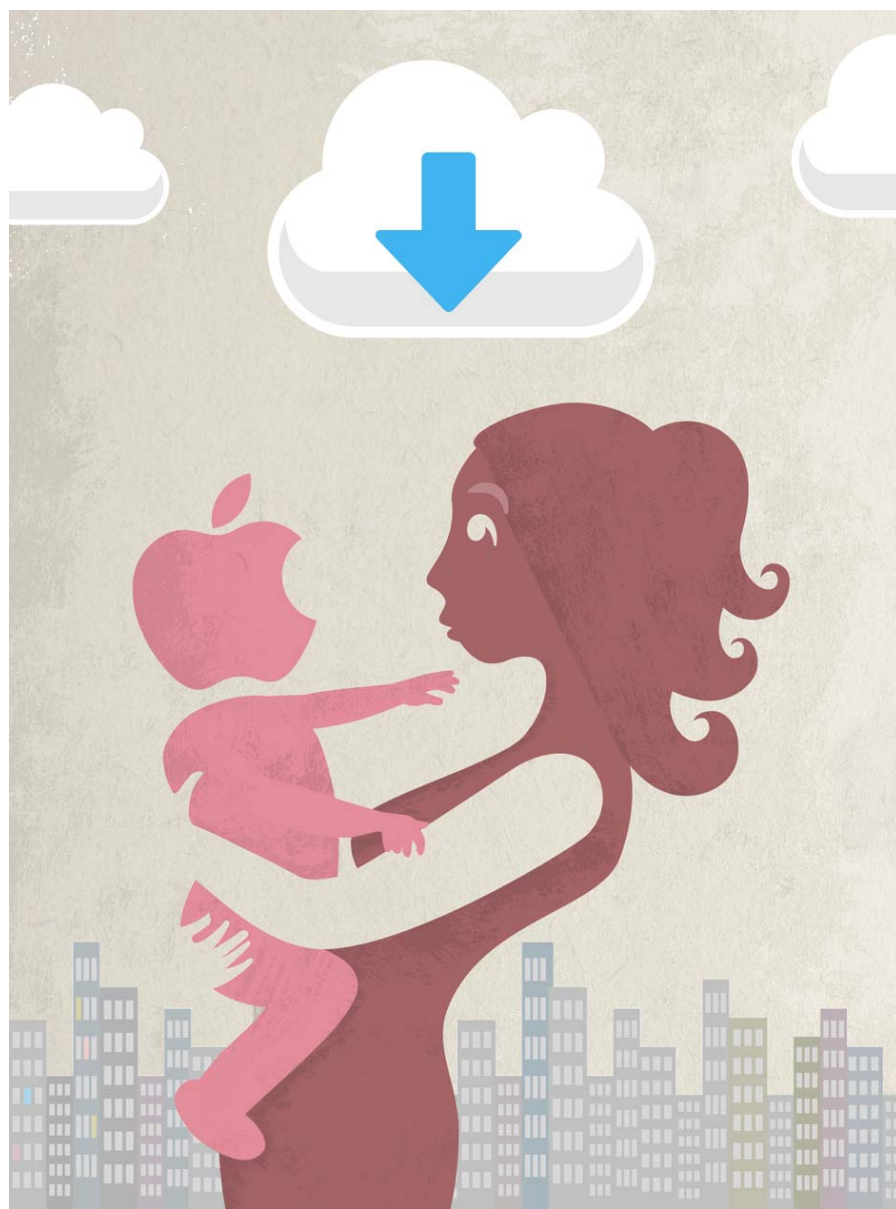
Dirigir toda la correspondencia a Michel Lallement  
<[michel.lallement@cnam.fr](mailto:michel.lallement@cnam.fr)>

<sup>1</sup> I. Berrebi-Hoffmann, M.C. Bureau, M. Lallement (editores), *Recherches sociologiques et anthropologiques*, ediciones especiales "Tiers lieux de fabrication et culture collaborative. De nouveaux mondes de production sont-ils en train d'émerger?" (en prensa).



# > La búsqueda de la igualdad de género en una “sociedad multi-activa”

por **Bernard Fusulier** FNRS, Universidad de Lovaina, Bélgica y **Chantal Nicole-Drancourt** CNRS-LISE, Conservatoire national des arts et métiers, París, Francia



Políticas de género problemáticas en el lugar de trabajo. Ilustración de Arbu.

**E**l declive de las tasas de natalidad, la disminución de tasas de empleo entre mujeres que son madres, y la renuncia de la condición de maternidad se consideran como grandes riesgos, que están relacionados a la demografía y al nivel de bienestar social en los países “desarrollados”. Aunque las crisis financieras y presupuestarias de los últimos años afectan todos los contratos sociales, amenazan de manera particular las dinámicas de la igualdad de género y empeoran las condiciones para un balance entre trabajo y familia.

Los hacedores de políticas públicas en todos los niveles reportan un mayor reconocimiento sobre el papel de la mujer en la formación de cohesión social. Las mujeres son reconocidas por su contribución al mercado laboral y las actividades domésticas, una participación doble que es valorada particularmente durante tiempos difíciles, contrarrestando deficiencias y desequilibrios institucionales al tiempo que asegurando el desarrollo social y económico.

>>

Un nuevo consenso global reconoce que la mayoría de personas espera poder cuidar de sus hijos y de otras personas dependientes, sin abandonar sus carreras profesionales. Esperan mantener este doble compromiso sin cuestionar la actual división sexual del trabajo y las actividades reproductoras que, hoy como siempre, presumen que la mujer asume una responsabilidad primaria en las actividades domésticas. Consecuentemente, casi todos los países han acordado ayudar a padres y madres a alcanzar estos dos objetivos y convertir el balance entre trabajo y familia en un asunto prioritario para los *individuos* como para la *sociedad*.

A primera vista este diagnóstico público parece ser sexualmente neutro: el objetivo es permitir que *todos* trabajen por un ingreso. En todos los países donde el estado de bienestar es fuerte (así como en todos los países donde estos programas están construyéndose), vemos una expansión sin precedentes de políticas sociales destinadas a reconciliar las obligaciones laborales y familiares: de reformas a los sistemas de impuestos y subsidios, un mejor manejo de los sistemas de cuidado infantil, así como el fomento de prácticas que buscan un mejor balance entre la vida profesional y familiar en términos de la organización del trabajo.

Sin embargo, en todos estos países está ocurriendo un cambio en la implementación de políticas. A pesar de la retórica de *neutralidad* de género, las medidas plasmadas en las agendas políticas (o al interior de las compañías) están perdiendo su neutralidad en la práctica. Las licencias familiares *para todos* se están convirtiendo en maneras privilegiadas de apoyar a las madres trabajadoras; el tiempo de trabajado reducido *para todos* se diluye a través de la explosión del trabajo de tiempo parcial *para las mujeres*; la duración de la licencia maternal que debería incluir a ambos padres es juzgado en términos de su

impacto sobre el bienestar de *las mujeres* y de *los niños*, etc. En otras palabras, en su núcleo, estas políticas no están dirigidas a los hombres o los padres sino a las mujeres, como madres o madres potenciales. En octubre de 2014, por ejemplo, Facebook y Apple admitieron francamente esta situación cuando le ofrecieron a sus empleadas “que se enfrentan a la competencia de los hombres y un mercado laboral cada vez más competitivo” la opción de congelar sus ovúlos para que pudieran considerar tener hijos una vez sus carreras ya estuvieran consolidadas.

Este patrón refleja en parte la resistencia al cambio de patrones familiares; cambios que tienen lugar a pesar de las medidas para ayudar a los padres trabajadores. Además, mantener el trabajo de las madres (cuando la mayoría de madres tienen una “jornada doble” de trabajo y apoyo familiar) se convierte en un verdadero problema político, suscitando preguntas acerca de si requerir que las mujeres prioricen su trabajo “no productivo” es física o psicológicamente sostenible y de si estas prácticas transgreden los ideales de justicia social.

La lucha para reconciliar la vida profesional y familiar todavía está lejos de ser ganada. Empezamos con preguntas generales (¿cómo ayudar a que los padres balanceen su vida laboral y familiar?), pero sólo ofrecemos soluciones parciales (esperando que las madres obtengan ingresos sin cambiar la división sexual del trabajo).

Para dar un paso adelante, la movilización debe empezar con criticar y reconstruir los fundamentos organizacionales e institucionales de las sociedades basadas en el ingreso salarial del siglo XIX y los estados de bienestar del siglo XX. Debemos cuestionar los arreglos sociales establecidos y deconstruir la naturalización de las prácticas que siguen de estos arreglos. Debemos cuestionar

los contratos sociales que involucran relaciones de género: la idea de un mundo organizado alrededor de la producción, el supuesto de la figura atomizada del productor que es apoyado por una cuidadora, el modelo de un proveedor masculino, el pacto de solidaridad androcéntrico. Debemos deconstruir la partición social de las actividades productivas y reproductivas, y la asignación de su compleción de acuerdo al género.

Si nos tomamos en serio estas propuestas, podríamos entonces empezar a considerar un modelo de sociedad alternativo, empezando por un marco de referencia que ya no tome a las actividades por fuera del empleo como actividades socialmente útiles de tipo secundario. Podemos comenzar a transformar la sociedad salarial en una “sociedad multi-activa”. El empleo puede ser re-imaginado en relación con otras actividades juzgadas merecedoras de apoyo en términos de inversión social, sin que ninguna de estas actividades sea considerada hegemónica o reservada para hombres o mujeres. La inactividad o el no-trabajo sería algo poco común y la articulación familia-trabajo dejaría de ser una carga que recae principalmente sobre las mujeres.

Esta transformación requiere la construcción progresiva de un nuevo régimen de actividades, donde el estatus de estar “activo” deje de estar definido en términos de una noción restrictiva del empleo, sino basado en una noción del trabajo más inclusiva, acogiendo el trabajo del cuidado y el trabajo civil. Desde esta perspectiva, la sociedad dejaría de enfocarse en el trabajo pago y de pasar por alto las formas de trabajo que están fuera del mercado; en lugar de eso, avanzaremos hacia una concepción amplia del trabajo que enfatice y reconozca la utilidad de todas las actividades que contribuyen al bienestar y al bien común. ■

Dirigir toda la correspondencia a Bernard Fusulier <[bernard.fusulier@uclouvain.be](mailto:bernard.fusulier@uclouvain.be)> y Chantal Nicole-Drancourt <[drancourtchantal@hotmail.com](mailto:drancourtchantal@hotmail.com)>

# > Negociando enfermedades crónicas en el trabajo

por **Anne-Marie Waser, Dominique Lhuillier, Frédéric Brugeilles, Pierre Lénéel, Guillaume Huez, Joëlle Mezza y Cathy Hermand**, Conservatoire national des arts et métiers, París, Francia

**E**n Francia, mantener a la población en edad de trabajar se ha convertido en un asunto preocupante por dos razones: esta población está envejeciendo y se diagnostican porcentajes cada vez más altos con enfermedades crónicas, particularmente de cáncer. Los programas de detección amplios han aumentado el número de casos diagnosticados por año, mientras que los avances médicos, la detección temprana y los tratamientos mejorados con menos efectos secundarios han transformado varias condiciones anteriormente mortales a enfermedades crónicas. En Francia, casi 15 millones de jóvenes han sido diagnosticados con enfermedades crónicas, aproximadamente un 20% de la población en edad de trabajar.

Las organizaciones de pacientes han resaltado sus preocupaciones sobre sostener por mucho tiempo a aquellas personas que viven con enfermedades o con discapacidades. Sin embargo, las agencias encargadas de desarrollar investigación sobre varias enfermedades (hepatitis, VIH, cáncer, esclerosis múltiple, diabetes, entre otras) recientemente comenzaron a solicitar investigación social cualitativa. Específicamente, están interesadas en aprender más sobre los individuos que retoman el trabajo luego de una incapacidad médica y sobre cómo permanecen empleados. Dentro de este contexto, desarrollamos un proyecto de investigación-acción juntando a psicólogos y a sociólogos para: a) comprender las condiciones bajo las cuales vive una persona con una enfermedad vuelve a trabajar y mantiene el empleo; b)

intervenir para ofrecer recursos individuales y colectivos que favorecen su contratación.

Este proyecto de investigación-acción fue llevado a tres agencias francesas grandes. Por más de dos años y medio, estudiamos grupos de personas diagnosticadas con males específicos que querían volver a trabajar o realizar cualquier actividad que les guste hacer y que puede o no proveer recursos monetarios (labores de cuidado, enseñanza, trabajo comunitario voluntario, etc.). Para examinar sus condiciones sociales, tuvimos en cuenta tres niveles jerárquicos en nuestro estudio: a) las prácticas de la dirección de recursos humanos relacionadas a la salud y problemáticas sociales en el lugar de trabajo; b) los empleados intermediarios que manejaban casos individuales de incapacidades médicas, fatiga crónica y discapacidades temporales o permanentes; c) los trabajadores que han vuelto a trabajar luego de un diagnóstico así como sus colegas. Analizamos todos los elementos identificados por esta población como relevantes para explicar el impacto de una enfermedad en la vida laboral, la vida en familia, el medio ambiente, la comunidad, entre otros. Más específicamente, preguntamos sobre los obstáculos que enfrentan, los recursos empleados para enfrentar estos obstáculos y bajo qué condiciones podían ser usados estos recursos.

Nuestra investigación no se limitó a los empleados con una enfermedad o discapacidad declarada. Intentamos comparar los recursos disponibles de los empleados que

## “Solamente 2,5 millones de personas solicitan certificados de enfermedad, aunque unos 9,9 millones podrían hacerlo”

no habían declarado su enfermedad a sus colegas o supervisores, con los trabajadores que habían solicitado y obtenido compensaciones por discapacidad. Para poder obtener estos beneficios sociales, estos últimos deben solicitar un certificado de enfermedad de una agencia encargada de asesorar estas declaraciones. De forma importante, la mayoría de empleados en Francia que tienen una enfermedad crónica o discapacidad no solicitan estos beneficios. En efecto, solo 2,5 millones de personas solicitan certificados de enfermedad, aunque unos 9,9 millones de personas podrían hacerlo. Buscamos entender las consecuencias de declarar una enfermedad, así como la razón por la cual la mayoría se abstienen de hacerlo.

Los resultados mostraron que las compensaciones autorizadas para una enfermedad o discapacidad declarada pueden cargar un estigma o ser percibidas como injustas. Emitidas por comisiones interdisciplinarias expertas, estas compensaciones usualmente son bastante rígidas, mientras que las enfermedades pueden ser más flexibles. Usualmente son malentendidas en el ambiente laboral, ya que en su gran mayoría los compañeros y supervisores son excluidos de negociar el tipo, variación y duración de la compensación. Más allá, hay un segundo obstáculo para la implementación de estas medidas de compensación: son impuestas desde arriba por las oficinas de recursos humanos o de servicios de salud, teniendo solo un conocimiento parcial de las verdaderas condiciones de trabajo reales. Por lo tanto, estas medidas usualmente ignoran los arreglos informales entre compañeros de trabajo, que se realizan en acuerdo con la gerencia y pueden ofrecer más flexibilidad. Basados en la reciprocidad, todos los arreglos locales que hemos analizado

producen menos tensiones en el lugar de trabajo que las disposiciones impuestas sin una negociación previa. Además, los casos de reciprocidad que observamos involucran actividades tanto individuales como colectivas. En resumen, los arreglos locales eran fundamentados en contextos específicos.

Nuestro estudio halló que las compensaciones exitosas (aquellas percibidas como justas por los actores sociales que duraron más allá de la incapacidad médica) tienen varias características: son híbridos de las medidas legales y los arreglos locales; son articulados por aquellos que encuentran dificultades en su lugar de trabajo; y la compensación es elaborada conjuntamente. Estos actores sociales hablaron a favor de las compensaciones para cualquier discapacidad y para cualquier empleado. Ellos cuestionaron algunas certificaciones expertas de enfermedades que ofrecían derechos, pero fueron percibidas como medios para tomar ventaja de una enfermedad. En total, las acciones llevadas a cabo fuera de las empresas buscaban crear condiciones locales de reciprocidad entre aquellos brindando y recibiendo ayuda que fuera más allá de la solidaridad, la benevolencia, la asistencia mutua y la compensación por discapacidad. Encontramos que las organizaciones de pacientes brindaron oportunidades reales para los participantes de comenzar a transformar sus condiciones de trabajo. Finalmente, también permitieron a los individuos reapropiarse del significado de estar enfermos, restablecer una identidad y traer situaciones individuales al ámbito de los derechos colectivos. ■

Dirigir toda la correspondencia a Anne-Marie Waser  
<[anne-marie.waser@cnam.fr](mailto:anne-marie.waser@cnam.fr)>

# > Festejando la democracia en Indonesia

por **Lucia Ratih Kusumadewi**, Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia, miembro de los Comités de Investigación de la AIS sobre Sociología de la Religión (RC22) y Clases Sociales y Movimientos Sociales (RC47)



*Simpatizantes del equipo presidencial de Joko Widodo y Jusuf Kalla organizan su campaña en Yakarta.*

“¡Saludos! ¡Dos dedos! ¡No olviden votar por Jokowi!”. Slank, una famosa banda de rock, cantó con alegría y júbilo apoyando la candidatura presidencial indonesia de Jokowi y su colega que se lanzó a la vicepresidencia, Jusuf Kalla, en el estadio Bung Karno de Yakarta el 5 de julio del 2014. A ellos se unieron decenas de miles de personas simpatizantes: jóvenes y viejos, hombres y mujeres, pobres y ricos, cantaron junto a ellos durante el concierto gratuito. Unos momentos después el hombre al cual habían estado esperando apareció: Jokowi se subió al escenario y saludó a sus simpatizantes.

La atmósfera se volvió eléctrica y clamorosa, mientras las multitudes a través del estadio gritaban “¡Jokowi! ¡Jokowi!” mientras sostenían dos dedos arriba.

Por primera vez este año, las elecciones en Indonesia se transformaron en un “verdadero festejo para la democracia de las personas”. El entusiasmo fue imparable, mientras un sinnúmero de personas participaron en una campaña vigorosa, que involucraba actividades que variaban desde diseñar actividades de campaña hasta recaudar más de 295 mil millones de rupias en donaciones. El día de las

elecciones, luego de que una campaña política vigorosa rechazara el tipo de dinero que previamente había sido aceptado de forma natural, las personas trabajaron juntas para monitorear las elecciones para prevenir el fraude.

Esta es la cara de la nueva democracia fascinante de Indonesia: ha habido un cambio significativo, desde una democracia cargada con política corrupta y políticos que ansían el poder y que a menudo recurrían a prácticas retorcidas, hasta unas reformas democráticas radicales que le apuntan a establecer una democracia más civilizada y humana. Durante las recientes elecciones de Indonesia, la movilización política basada en transacciones frecuentemente practicada por las élites de los partidos políticos ha perdido popularidad y parece estar al borde de volverse una práctica obsoleta. En su lugar hemos sido testigos del nacimiento de una nueva cultura política, basada en participación voluntaria.

¿Qué ha causado este cambio? Pocos observadores hubieran predicho el “giro” que parece haber ocurrido repentinamente, especialmente luego de la larga historia de política corrupta de Indonesia. Claramente, el “efecto Jokowi” ha sido un factor crucial en empezar a hacer rodar la bola, pero algunas circunstancias particulares parecen haber iniciado los vientos de cambio. En cierto punto, el universo parece haber dicho “este es el momento”: un momento donde los anhelos de cambio fueron respondidos, y hubo un climax de frustración y disgusto ante el caos andante, la corrupción y la oligarquía política.

Joko Widodo, mejor conocido como Jokowi, se ha vuelto cada vez más popular en los últimos dos años. Jokowi, un empresario que inició su carrera política en el 2005 como el alcalde de Solo, una de las grandes ciudades en Java Central, es conocido como un hombre honesto y trabajador, de antecedentes modestos. También es querido por su aproximación humanista en la implementación de las políticas gubernamentales, limpiando su municipio de la corrupción y trabajando arduamente para convertir a la ciudad de Solo en un centro de turismo y cultura. En el 2013, Jokowi fue nombrado el tercer mejor alcalde del mundo por la Fundación City Mayors, y en el 2014, Jokowi apareció en el listado de la revista Fortune de los “50 Mejores Líderes Mundiales”.

El éxito de Jokowi en Solo impulsó su carrera política. Respalado por el Partido Democrático de Indonesia por la Lucha (PDI-P), el principal partido de oposición del país, en el 2012 fue elegido gobernador de la capital de Indonesia, Yakarta. Junto al gobernador sustituto Tjahaja Basuki Purnama (Ahok), también reconocido por su integridad, Jokowi implementó varios programas nuevos, incluyendo programas para el control de inundaciones y congestión de tráfico (problemas que anteriormente no habían sido tomados en serio en esta mega ciudad en crecimiento). En adición a controlar el río y mejorar el transporte público, Jokowi y Ahok también reformaron la planeación urbana, la asistencia médica y la educación en Yakarta.

Mientras se acercaba la elección presidencial, el PDI-P presentó a Jokowi como su candidato presidencial. Fue reunido con Jusuf Kalla (JK), un político mayor del Partido Golkar y exvicepresidente. La visión para Indonesia de Jokowi fue empaquetada como una invitación para iniciar la “Revolución Mental”, mientras Jokowi invitaba a las personas de Indonesia a unirse a sus esfuerzos. La anti corrupción y la transparencia, la ayuda mutua, la creatividad, la independencia y la apreciación de las diferencias son algunos de los valores fundamentales en los cuales se basa la Revolución Mental.

El 22 de julio de 2014, la Comisión General de Elecciones finalmente declaró la victoria para Jokowi-JK, quienes ganaron con el 53.1% de los votos. Los oponentes, Prabowo-Hatta, fueron declarados derrotados con el 47.8% de los votos. Muchos analistas describen esta victoria como una victoria del pueblo, teniendo en cuenta que la victoria de Jokowi-JK no está directamente relacionada con el apoyo de partidos políticos. Los partidarios de Jokowi-JK fueron predominantemente independientes, la mayoría no estaban asociados con un partido político en particular, y muchos no habían participado activamente en elecciones previas.

Hoy en día, tenemos la esperanza de una democracia saludable y una política digna para el pueblo indonesio. La nueva cultura de la participación voluntaria en las últimas elecciones puede ser prueba de un embrión de reformas democráticas más amplias y un primer paso para la transformación social en Indonesia. ■

Dirigir toda la correspondencia a Lucia Kusumadewi <[lucia.ratih@ui.ac.id](mailto:lucia.ratih@ui.ac.id)>

# > La corporativización de la educación superior indonesia

por **Kamanto Sunarto**, Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia, Miembro de los Comités de Investigación de la AIS sobre Educación (RC04) e Historia de la Sociología (RC08)



*Estudiantes en Yakarta protestan contra las regulaciones neoliberales a la educación.*

**D**espués de que en 1998, el movimiento de reforma indonesio terminó con 32 años de un régimen militar autoritario, el estado introdujo reformas educativas controvertidas. Desde 2003, el establecimiento de la Corte Constitucional abrió un nuevo espacio donde la sociedad podía desafiar las leyes que considerara inconstitucionales, y en la última década,

los prestadores del servicio de la educación, estudiantes y grupos de la sociedad civil han hecho demandas sobre las nuevas leyes educativas.

En 1999 el gobierno promulgó una regulación oficial que permitía la corporativización de ciertas instituciones públicas de educación superior. Una de las razones dadas para estos cambios fue garantizar mayor autonomía para mejorar la competitividad nacional en respuesta a la alta competencia causada por procesos de globalización. Consecuentemente, entre 2000 y 2010, el gobierno cor-

porativizó seis universidades públicas y dos institutos públicos.

La corporativización de universidades e institutos públicos desató fuertes reacciones en el público, especialmente entre padres y estudiantes. En el pasado, las matrículas de instituciones públicas de educación superior estaban estrechamente controladas por el gobierno. Con la expansión de las instituciones públicas de educación superior, la financiación del gobierno no podía mantenerse a la par de los crecientes costos educativos por lo cual la matrícula se con-

virtió en una fuente de ingresos cada vez más importante. Los incrementos periódicos en los costos de matrícula se volvieron comunes.

Los estudiantes de instituciones públicas de educación superior habían desafiado en el pasado los aumentos de costos en sus campus a través de varios medios como protestas en las universidades y en las calles, ocupaciones, peticiones, debates públicos, críticas en medios masivos de comunicación y, más recientemente, a través de redes sociales. Muchos estudiantes se opusieron a la corporativización de las instituciones públicas de educación superior temiendo costos de matrícula más altos y una comercialización más general de la educación que efectivamente excluiría a estudiantes no privilegiados. La mayoría de las veces, sin embargo, estas protestas fueron en vano pues las autoridades universitarias se mantuvieron firmes, sabiendo que tenían el apoyo del gobierno.

En 2003 el estado promulgó una nueva ley en la que, entre otras cosas, proponía corporativizar todas las instituciones educativas formales y no formales, en todos los niveles desde preescolar hasta educación terciaria, tanto pública como privada. Se promulgó en 2009 una ley que corporativizaba las instituciones educativas.

Estas dos nuevas leyes alarmaron a las fundaciones privadas que dirigen instituciones educativas, porque sus controles estarían restringidos significativamente. En 2006, dieciséis organizaciones privadas y no gubernamentales le pidieron a la Corte realizar una revisión judicial de la ley de 2003, en particular el artículo sobre corporativización. La petición fue rechazada, sin embargo, porque la ley todavía no se había sancionado.

Padres, madres, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil también empezaron a solicitar revisiones judiciales porque estaban interesadas en asegurar una educación pública

gratuita y prevenir la corporativización de la educación superior pública que, desde su punto de vista, llevaría a la comercialización. Argumentaban que la educación era un bien público, y que el costo total de la educación era responsabilidad del estado; creían que cualquier intento de cambiar la carga de los costos educativos a la sociedad era inconstitucional.

En 2009, organizaciones privadas y no gubernamentales junto con estudiantes, profesores, padres y académicos de varias regiones enviaron cinco peticiones distintas para revisar las leyes de 2003 y 2009. Su esfuerzo vio frutos: la Corte revisó varios artículos de la ley de 2003 y eliminó por completo la ley de 2009.

En muchos casos, estos desafíos a aspectos específicos de la reforma educativa generalmente reflejan la ubicación social específica de quien desafía. Las organizaciones que administran a los prestadores de educación estaban interesadas en la sostenibilidad de sus instituciones educativas privadas; se oponían a la corporativización porque perderían el control sobre sus instituciones educativas y enfrentarían incertidumbres legales. Después de que se aprobaron sus peticiones por revisar las leyes de 2003 y 2009, su resistencia a la corporativización de las instituciones educativas finalizó.

Después de que se declarara como no vinculante la ley de 2009, sin embargo, el estado promulgó en 2012 una nueva ley sobre educación superior que brinda una nueva base legal para la corporativización de las instituciones públicas de educación superior. En 2013, estudiantes de pregrado en derecho de una universidad pública solicitaron a la Corte revisar seis artículos de la ley de 2012; sin embargo, se rechazaron sus solicitudes.

¿Qué consiguieron los estudiantes, madres, padres, académicos preocupados y las organizaciones de sociedad civil con sus peticiones de revisión

judicial? Aunque se modificó la ley de 2003 y se eliminó la de 2009, sus objetivos (educación gratuita y la prevención de la corporativización de las instituciones públicas de educación superior) no se obtuvieron. Juntas, las decisiones de la Corte significan que:

1. Los y las estudiantes de instituciones públicas superiores deben pagar matrículas, sujetas a controles del gobierno;
2. Las instituciones públicas de educación superior requieren destinar al menos el 20% de sus puestos a aspirantes con buenos logros pero no privilegiados económicamente, pero no están obligados a otorgar más del 20%;
3. Se les permite a las instituciones públicas de educación superior utilizar distintos sistemas de admisión de estudiantes; la Corte vinculó estas decisiones a acciones afirmativas mientras que estudiantes tienden a ver esta situación como comercialización;
4. La corporativización de instituciones públicas de educación superior elegibles continúa sin oposición hasta el momento.

Estudiantes, padres, madres y activistas de la sociedad civil han agotado todas sus opciones para obtener educación superior pública gratuita porque no se pueden apelar las decisiones de la Corte Constitucional. Su derrota ha desmoralizado al movimiento, y actualmente no hay iniciativas para oponerse a la comercialización de la educación superior. Aún así, estudiantes en varias instituciones públicas de educación superior todavía disputan los costos de matrícula que son injustos hacia las familias de bajos recursos, pero el objeto de su disputa ahora está en su propia institución en lugar de en el estado. ■

Dirigir toda la correspondencia a Kamanto Sunarto <[kamantos@yahoo.com](mailto:kamantos@yahoo.com)>



# > Movimientos laborales y políticas de la clase trabajadora en Indonesia

por **Hari Nugroho**, Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia, Miembro de los Comités de Investigación de la AIS sobre Movimientos Sociales (RC44) y Movimientos Sociales, Acciones Colectivas y Cambio Social (RC48)



Trabajadores manifestando en el Día del Trabajo en Yakarta, haciendo un llamado de solidaridad a la clase trabajadora.

**D**espués de un largo período de ausencia en la arena política, el movimiento sindical en Indonesia parece estar al borde de un nuevo activismo político. En 2014, a nivel distrital se eligieron varios líderes sindicales para el parlamento durante las elecciones generales. Este logro es histórico, pues no ha habido una representación genuina de la clase

trabajadora en el parlamento nacional y local de Indonesia por casi 50 años. El debate sobre la expansión de la lucha de los trabajadores más allá del lugar de trabajo hacia la arena pública también se ha agitado, con muchos experimentos sociales y políticos en la última década. Podemos preguntar ahora: ¿puede el movimiento trabajador transformar la política de clases en Indonesia?

La liberalización económica y la democratización que comenzó desde la caída del régimen autoritario en 1998 generaron nuevos desafíos y un patrón distinto de conflicto industrial. El control estatal se ha reemplazado por el control del mercado. El capital móvil y poderoso en un mercado global altamente competitivo se convirtió en el “nuevo oponente”, la nueva amenaza al desarrollo de los sindicatos. La base de los nuevos sindicatos ya estaba siendo erosionada por una flexibilización excesiva del mercado laboral, incluso antes de que esos nuevos sindicatos volvieran a ganar su posición después del colapso del estado corporativista de Suharto.

Las condiciones de hoy hacen que los sindicatos se enfoquen en la anti-flexibilización. Las agendas tradicionales de aumento de salarios, libertad de asociación y la resistencia a la terminación del contrato también son parte de este nuevo marco. Los sindicatos atacan al estado por sus políticas de liberalización laboral y a las compañías por imponer condiciones de trabajo precarias (Juliawan, 2011). Los sindicatos han, por tanto, hecho campañas por un sistema de seguridad social más efectivo que permita compensar las inseguridades laborales y la creciente vulnerabilidad de trabajadores. El movimiento sindical ha estado en el centro de las exigencias por transformar el sistema de bienestar social, creando así un electorado más amplio entre la pérdida de miles de miembros sindicales.

Sin embargo, el ampliar el electorado del movimiento laboral presenta nuevos desafíos, particularmente porque los sindicatos intentan obtener un apoyo social y político más amplio para lidiar con las presiones agresivas del mercado. Aunque muchos sindicatos permanecen siendo conservadores, varios sindicatos locales afiliados a sindicatos progresistas nacionales han utilizado dos estrategias. La primera implica volverse líderes especialmente entre comunidades de clases trabajadoras pero también construir relaciones con diferentes grupos, incluyendo campesinos y vendedores ambulantes. Una segunda estrategia implica tomar parte en la política electoral. Aquí el objetivo es construir una representación en parlamentos locales abriendo un camino a la representación nacional en aras de influenciar el proceso de toma de decisiones de política pública. El participar en la política electoral también se ve como un vehículo para establecer una base más amplia de apoyo a los sindicatos.

El patrón de conflicto industrial y la transformación del sindicalismo en la era post-Suharto puede haber estimulado un movimiento creciente y más consolidado de la clase trabajadora, pero las ganancias nunca están aseguradas (Hadiz, 2001). Por ejemplo, dos líderes de un sindicato progresivo en la región industrial de Bekasi, cerca de Yakarta, lograron obtener curules locales en 2014. Este fue un experimento exitoso pues ganaron a través del apoyo organizado de miembros militantes. Después de su histórica victoria, los líderes del sindicato nacional tomaron una posición controvertida en la elección presidencial

de 2014: movilizar a miembros sindicales para apoyar al candidato presidencial que había trabajado en el régimen autoritario de Suharto y que estaba siendo apoyado ampliamente por partidos políticos islámicos que no tenían raíces políticas en la clase trabajadora. Esto ha planteado preguntas importantes sobre los intereses de los líderes nacionales sindicales en la política de clases.

Mientras tanto, la mayoría de los otros experimentos sindicales en la política electoral han perdido fuerza, pues fallan en ganar votos significativos incluso en las comunidades de trabajadores. Muchos de quienes sí ganaron curules no usaron su propio sindicato como base política, beneficiándose en su lugar de otras maquinarias políticas. En lugar de construir una política de clase trabajadora, estos políticos se encontraron lidiando el pragmatismo de la política del dinero y compitiendo con ideologías religiosas poderosas.

Se encuentra una situación similar en los esfuerzos por ampliar el electorado sindical a través de movimientos comunitarios. Aunque algunos sindicatos fueron bastante exitosos en establecer amplias redes e intercambiar el apoyo social por político, ahora sin embargo les resulta difícil establecer un interés común estratégico. Cada grupo en la red tiende a seguir dominado por sus propios horizontes estrechos; el apoyo simplemente se intercambia entre grupos particulares, sin construir un interés común de clase incluso entre trabajadores. De forma similar, el éxito en promover un sistema de seguridad social nacional que vincule la clase trabajadora a grupos sociales más amplios no se puede ver como el triunfo de la política de clase: refleja una coalición de ciudadanos de distintas clases más que unos intereses de la clase trabajadora per se.

Aunque hay avances, el desarrollo del movimiento laboral indonesio actual está constreñido por la vulnerabilidad de su base social. Aunque la generación de jóvenes (que constituye la mayoría de la fuerza de trabajo y es el impulso primario detrás del movimiento laboral actual) nunca ha vivido bajo el régimen autoritario, ha experimentado una larga historia de despolitización (Caraway et al, 2014). Los conflictos industriales, los movimientos sociales y la conciencia colectiva construidos por estos procesos no son suficientes para forjar un movimiento político fuerte basado en la clase. Más aún, los intereses intraclase así como otras identidades como las religiosas son rivales poderosos para la alianza de trabajadores. ■

Dirigir toda la correspondencia a Hari Nugroho <[hari.nugroho@ui.ac.id](mailto:hari.nugroho@ui.ac.id)>

**Referencias**

Caraway, T. L., Ford M., Nugroho H. (2014) “Translating membership into power at the ballot box? Trade union candidates and worker voting patterns in Indonesia’s national elections,” *Democratization*. <http://dx.doi.org/10.1080/13510347.2014.930130>

Hadiz, V. R. (2001) “New Organising Vehicles in Indonesia: Origins and Prospects,” in Jane Hutchison and Andrew Brown (eds.) *Organising Labour in Globalising Asia*. Londres y Nueva York: Routledge.

Juliawan, B. H. (2011) “Street-level Politics: Labour Protest in Post-authoritarian Indonesia,” *Journal of Contemporary Asia*, 41(3): 349-370.

# > Cuando la religión se convierte en identidad legal

por **Antonius Cahyadi**, Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia, Miembro del Comité de Investigación de la AIS sobre Sociología de la Religión (RC22) y del Grupo Temático de la AIS sobre Derechos Humanos y Justicia Global (TG03)



La tarjeta de identidad indonesia, que incluye la identificación religiosa.

**A**l final de la era de Suharto (en los noventas), la esfera pública indonesia estaba marcada por sentimientos religiosos e intolerancia racial. En ese entonces era difícil no ser musulmán o ser chino y, por tanto, ser percibido como un no-nativo indonesio. Estos temas sensibles estuvieron en juego en las revueltas de 1998 que provocaron la “Reforma” que acabó con el Nuevo Orden de Suharto.

La discriminación racial hacia los chinos-indonesios, estipulada en la política del gobierno en 1967 cuando Suharto empezó a gobernar Indonesia, se prohibió en el año 2000 por Abdurrahman Wahid, el cuarto presidente de Indonesia. El confucianismo, que se percibe como la religión tradicional de los indonesios-chinos, fue reconocido como una de las religiones oficiales del país en 2006. Mientras que el sentimiento racial se ha moderado en la última década, persisten el sentimiento y el prejuicio religiosos. El tema es tan sensible que la gente evita la religión en el discurso público racional y crítico. La política hace intocable a la religión.

A través de la historia indonesia, la religión se ha usado en la política, alcanzando su pico en la burocratización de la identidad legal religiosa en los setentas. En la era de las Indias Orientales holandesas (de principios del siglo XIX hasta 1942), la religión, especialmente el islam, era considerada como una amenaza política porque podría movilizar el descontento civil. El gobierno colonial holandés dejó que el “islam religioso” creciera, pero reprimió el islamismo como una identidad política. Algunas políticas similares reprimían las actividades políticas de los grupos indígenas religiosos. Las expresiones religiosas se confinaron al reino de los asuntos personales.

Bajo el colonialismo japonés (1942-1945), el islam se volvió una estrategia de guerra. Los japoneses movilizaron los sentimientos anti-holandeses entre la mayoría indonesia musulmana, creando una unidad especial de administración estatal para controlar y facilitar el movimiento islámico; en la Indonesia independiente, esto se convertiría en el Ministerio de Asuntos Religiosos.

Durante el período temprano de independencia de Indonesia (1945-1959), los grupos que se identificaban como parte de un movimiento islámico más amplio decían que habían contribuido a la independencia de Indonesia y argumentaban que Indonesia debería volverse un estado islámico. Del otro lado, los grupos nacionalistas seculares, que incluían a musulmanes y no-musulmanes, insistían en que Indonesia debería ser un estado para todas las religiones.

Se llegó a un acuerdo entre estos dos grupos en la Constitución indonesia de 1945 (Artículo 29). Indonesia no era un estado secular, porque estaba basado en la creencia de un dios todopoderoso, pero no especificaba ningún credo religioso. Más aún, el nuevo estado garantizaba libertad religiosa. Pero el acuerdo también establecía un Ministerio de Asuntos Religiosos en 1946, un paso designado para acomodar a los grupos islámicos.

En la era de “democracia guiada” de Sukarno (1959-1965), hubo una polarización entre grupos religiosos y no-religiosos, con una gran tensión entre grupos religiosos (musulmanes y católicos) en un lado y comunistas en el otro. La facción nacionalista de Sukarno, que se inclinaba al socialismo, tenía a ser más neutral en términos de religión. Para hacer que los grupos religiosos se sintieran protegidos de los ataques ateos-comunistas y para ganar el apoyo de los grupos religiosos, Sukarno introdujo una ley anti-blasfemias en 1965 sobre la “Prevención de la Blasfemia y el Abuso de las Religiones”. Luego, esta ley inesperada sirvió como base para la siguiente fase de islamización, en medida en que fue usada contra las personas que se creía que actuaban en contra de la religión (especialmente del islam).

Durante la era de Suharto (1966-1998), la religión se volvió excesivamente burocratizada. La ley anti-blasfemia fue el guardián de la posición de la religión en la esfera pública. Bajo esta ley, la administración Suharto reconoció varias religiones estatales oficiales (islam, protestante, católica romana, budismo e hinduismo), excluyendo el confucianismo y las creencias locales.

Desde la era de Suharto, los ciudadanos indonesios han tenido que declarar su religión oficialmente en sus tarjetas de identificación. Efectivamente, el Ministerio de Asuntos Religiosos funciona como un órgano ejecutivo para ejercer

el poder gobernante del estado. Adicionalmente, una ley de matrimonios aprobada en 1974 intensificaba el poder de la religión en la administración estatal: se requería adherirse a una religión oficial del país para obtener certificados de matrimonio y nacimiento. Mientras tanto, la Ley de Cortes Religiosas de 1989 establecía el poder de la religión en lo más profundo de la estructura administrativa en Indonesia a través de la rama judicial del gobierno. La religión se volvió una identidad legal. El Ministerio de Religión aumentó el poder de la religión, dándole una base burocrática; penetra la administración estatal, diferenciando entre ciudadanos. Así es como Suharto trajo a la religión bajo su mandato.

Con la Reforma (después de la renuncia de Suharto en 1998), la esfera pública en Indonesia se volvió un lugar de disputas para muchos grupos (religiosos, étnicos, de comunidades locales y territoriales) que buscaban atención pública y reconocimiento del estado. En la era de Reforma emergió un nuevo movimiento islámico politizado expresado, por ejemplo, en los conflictos de las Islas Molucas en 1999. Este aumento significativo de conflicto religioso conllevó a una nueva tolerancia por las religiones no reconocidas (no oficiales) y que “otras identidades islámicas” (ahmadíes y chiíes, como la mayoría suní) se representaran en la escena pública. Entre el reconocimiento del confucianismo y las creencias locales, se les ha permitido a otros grupos religiosos no reconocidos anteriormente registrar sus matrimonios desde 2006. Las personas ahora pueden dejar en blanco la “religión” en sus tarjetas de identificación, incluso si no pertenecen a alguna de las religiones oficiales.

Sin embargo, la religión a menudo gana en competencias políticas, lo que sugiere que el sentimiento y los lazos religiosos siguen siendo tan fuertes como cualquier otra afiliación sociocultural. El sentimiento religioso en la esfera pública de Indonesia no es simple. Pero claramente, cuando la religión se vuelve una identidad legal, la religión se ha reglamentado como un instrumento estatal, explotado por el gobernante que supervisa a los gobernados. A través de las agencias administrativas estatales de Indonesia y su rama judicial, la autoridad de la religión ha sido cooptada por el estado, y ha aumentado su poder sobre la vida cotidiana de las personas. En esta forma organizada, la religión se convierte en un asunto administrativo, amenazando su espiritualidad. ■

Dirigir toda la correspondencia a Antonius Cahyadi  
<[antonius.cahyadi@ui.ac.id](mailto:antonius.cahyadi@ui.ac.id)>

# > Estimulando la movilidad ascendente en Indonesia

por **Indera Ratna Irawati Pattinasarany**, Universidad de Indonesia, Depok, Indonesia, miembro de los Comités de Investigación de la AIS sobre Sociología de la Educación (RC04) y Estratificación Social (RC28)



Estratificación social en una calle en Yakarta.

**I**ndonesia experimentó una recuperación económica tremenda después de la crisis financiera asiática de 1997, pasando de ser un país de ingreso medio-bajo a entrar al grupo G-20. Adicionalmente, Indonesia ha obtenido estabilidad política, financiera y económica, y se ha vuelto una de las democracias más grandes del mundo (Banco Mundial, 2014a). A pesar del

crecimiento impresionante, la desigualdad también está aumentando, como evidencia el coeficiente de Gini de Indonesia que aumentó de 0,33 en 1999 a 0,41 en 2011. Esta desigualdad aumentada puede conllevar a una reducción lenta de la pobreza, crecimiento económico desacelerado y aumento de conflictos y tensión social. Más aún, la desigualdad refleja y crea accesos injustos a los servi-

>>

cios públicos: una niña en el último decil de la población tiene un 43% de probabilidad de desnutrición, comparada con sólo el 14% en el decil más alto. De forma similar, la probabilidad de abandonar la escuela es mucho más alta para niños de hogares más pobres: el 71% del decil más bajo abandonaría la escuela tempranamente, comparado con el 26% en el más alto (Banco Mundial, 2014b).

Por muchos años, la desigualdad en Indonesia ha sido más obvia en las oportunidades inequitativas para la movilidad social ascendente. ¿Qué personas son más exitosas en mejorar su posición social y qué factores producen la movilidad social ascendente? Mi investigación examinó la desigualdad en las áreas urbanas en dos provincias, Java Oriental y Occidental, utilizando datos longitudinales de la Encuesta de Vida Familiar Indonesia (IFLS) de 1993 a 2007. La muestra incluye a 1177 hombres y mujeres entre los 20 y 64 años.

Las oportunidades para la movilidad social ascendente en la Indonesia urbana son mayores para personas de clases sociales más altas que para las de clases bajas (Pattinasarany, 2012). Los datos muestran un 27% de movilidad social de clases bajas a medias comparado con el 45% de clases medias a altas. De hecho, las oportunidades para la movilidad social apenas existen en las clases bajas. En Indonesia, como en muchas partes del mundo, entre más baja la clase social, más pequeñas las probabilidades de movilidad ascendente. Así como la rigidez de clase, también hay una rigidez posicional, que deja a los encuestados en las mismas clases que sus padres.

Con respecto al género, es más probable que los hombres se muevan hacia arriba que las mujeres con posiciones similares, especialmente para aquellos que empiezan en las clases sociales más bajas. Las exigencias de que las mujeres satisfagan roles de género, en el hogar como en la vida profesional, complican las carreras de las mujeres y limitan su movilidad ascendente. La educación claramente influye en la movilidad social ascendente en Indonesia. A mayor nivel educativo, mayores las oportunidades de moverse hacia arriba. La clase social paterna tiene la mayor influencia en la clase de los encuestados, mientras que la educación de los encuestados es la segunda variable más fuerte.

Mi investigación cualitativa en la Java rural ratifica los resultados de estudios cuantitativos que dicen que es difícil que personas de clases bajas asciendan a clases medias o bajas. Sin embargo, hay unas excepciones interesantes en las que personas de clases bajas ascienden a clases medias, incluso sin educación. A continuación tres ejemplos.

- Muchos indonesios optan por trabajar en el exterior como trabajadores migrantes, sobre todo en trabajo do-

méstico (usualmente mujeres) y en fábricas o en construcción (principalmente hombres). Las decisiones de trabajar como migrantes se derivan principalmente de la falta de oportunidades laborales para los indonesios con poca educación. Más aún, los migrantes pueden ganar más de lo que ganarían en Indonesia por un trabajo similar y muchos envían remesas a sus parientes en los pueblos. Con estas remesas, las familias pueden subir a una clase social más alta.

- Otro camino es a través de la transmisión inter-generacional de habilidades especiales. Una comunidad en Garut (Java Occidental) es famosa por producir a los mejores barberos en Java. Por décadas, esta habilidad ha pasado de generación en generación. Muchos peluqueros profesionales exitosos trabajan temporalmente fuera de su pueblo en ciudades grandes como Yakarta. A través de sus habilidades específicas como barberos, muchos han aumentado exitosamente el estatus económico y social de sus familias.

- En tercer lugar, el emprendimiento ofrece un camino alternativo para moverse hacia arriba en la jerarquía social. En muchos pueblos hay un pequeño número de emprendedores que usualmente inician como independientes pero que luego crean empresas de micro-escala, y algunos incluso logran expandir sus negocios a pueblos cercanos. A menudo trabajan en pequeñas talleres, restaurantes o tiendas. Dependiendo del lugar, algunos emprendedores pueden comenzar sus negocios con créditos del banco o programas del gobierno o programas de responsabilidad social empresarial. Los emprendedores exitosos pueden ser capaces de avanzar a clases sociales más altas.

Se necesitan más estudios para explicar y superar la rigidez de la estructura de clase Indonesia, en particular la falta de movilidad social ascendente para quienes están en el fondo de la distribución de ingresos. Estos estudios pueden abrir la discusión para programas potenciales del gobierno o el sector privado para mitigar la desigualdad de oportunidades para la movilidad social. ■

Dirigir toda la correspondencia a Indera R. I. Pattinasarany <[indera.pattinasarany@ui.ac.id](mailto:indera.pattinasarany@ui.ac.id)>

**Referencias**

Pattinasarany, I. R. I. (2012) *Intergenerational Vertical Social Mobility: Studies on Urban Society in the Province of West Java and East Java*. Tesis doctoral, Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad de Indonesia, Depok.

Banco Mundial (2014a) "Indonesia: Avoiding Trap." *Development Policy Review 2014*. Yakarta: Oficina del Banco Mundial.

Banco Mundial (2014b) "Understanding Inequality." Folleto de *Big Ideas Conference*. Yakarta: Banco Mundial, 23 de septiembre, 2014.